FUJIMORI

EL ELEGIDO DEL PUEBLO

Raúl A. Wiener F.

...SIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
...nrique Guzmán y Valle"
...
...ONJAN JOSE VEGA
XV
32088
W5
19

BALANCE DEL
PROCESO POLITICO EN EL PERU

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
BIBLIOTECA

COD. Nº INV.
B39333 57348

AÑO 2003 _____
AÑO 2004 F.R. Vilma.
AÑO 2005 H. FLOREZ
AÑO 2006 _____
_____

Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Biblioteca Central
INVENTARIO 2023
B01004305

Fujimori: El elegido del Pueblo

Balance del
Proceso Político
en el Perú

57348

Primera Edición Enero, 1996
© Raúl A.Wiener Fresco
Diseño de portada: Enrique Planas
Composición de textos: Augusto Malpartida León

A mi padre,
A quién tanto le debo.

Introducción

El presidente Fujimori suele contar que antes de emprender cualquier proyecto político, recurre previamente a la orientación de los brujos. Este sería, según dice, el verdadero secreto de su éxito prolongado. En 1990, ciertamente, el pueblo peruano no fue para nada consciente de este influjo de la magia negra en las artes paganas de la política cotidiana. Sin embargo el asombro por el impensado triunfo del "chinito" de la sonrisa enigmática dura hasta hoy día. Más aún, no se encuentran interpretaciones convincentes sobre la persistencia de la popularidad presidencial después de más de seis años de ejercicio de gobierno. Allí donde normalmente el desgaste había alcanzado hace tiempo a los jefes de Estado y condenado a una sucesión dudosa, Fujimori se ha dado el lujo de alcanzar una reelección abrumadora y de poner fuera de competencia a sus pretendidos opositores. El reciente traspiés en las elecciones municipales no le impide seguir recorriendo los pueblos jóvenes de Lima y otras ciudades, y los distritos rurales, recibiendo adhesiones reales de la población.

La razón de este trabajo es interrogarse sobre el fenómeno Fujimori, en el punto donde recién comienza su segundo período de gobierno. No será fácil ir más allá de la idea mágica para entender por qué un país de pobres mayoritarios ha reiterado su adhesión precisamente a quién no ha hecho sino aplicar una política económica que ahonda y extrema las brechas sociales. Tampoco está a la mano una respuesta simple a la resignación con la que han sido aceptadas las restricciones y abolición de derechos de los grupos sociales y las personas. Finalmente, la opción tan clara de una mayoría en relación a la supuesta eficacia del autoritarismo frente a la oferta de la misma política pero en democracia, que

hacía la oposición institucionalista, está pendiente de un balance que no han abordado ni vencedores ni vencidos.

Escribir en 1995 sobre el proceso político, aún inconcluso, del fujimorismo, es una tarea riesgosa, sobre todo porque este es un período en el que las certezas que debieran enmarcar el análisis son borrosas o no existen. Podríamos advertir, por adelantado, que parte de la fuerza del gobierno actual deriva de la crisis general de la producción intelectual, es decir de la ausencia de una visión global de los acontecimientos que haga posible la crítica integral y el cambio de rumbo. Es por ello mismo que la bibliografía sobre este período es tan fragmentada y anecdótica. Y es seguro que con este aporte apenas si estaremos empezando a hacer frente a este vacío de ideas para actuar.

¿Dónde se encuentran los protagonistas de la política nacional de los años 70 y 80, los partidos políticos, sindicatos, organizaciones populares?. ¿Qué pasó con ellos? ¿Es el fujimorismo una nueva representación de la sociedad peruana o un accidente histórico, camino a superarse?. ¿Después de la dictadura, constitucionalizada a lo Fujimori, el péndulo de la historia nos regresará al imperio de los viejos partidos parlamentarios, o será posible que lleguemos a abrirle una perspectiva distinta, de democracia verdadera y control social del poder, en el Perú?. ¿Cuáles son los tiempos políticos, de aquí en adelante?.

Son, como se ve, muchas preguntas. Planteadas, todas ellas, con una cortante exigencia de claridad en las respuestas. Las siguientes líneas darán cuenta de nuestras aproximaciones a los problemas y posibilidades del Perú, cuando nos preparamos a vivir el cambio de siglo. Fujimori el elegido del pueblo: ¿lo seguirá siendo en los años que vienen?. Creemos que no serán los brujos, sino los hombres y mujeres libres de nuestra patria, los que resolverán este dilema.

Raúl A. Wiener F.
26 de noviembre de 1995

Capítulo I
Milagro Asiático

Ha concluido una etapa de crisis económica prolongada. El ajuste y la reforma neoliberal han creado un nuevo escenario con problemas distintos a los que se verificaron en las décadas del 70 y 80.

EL CICLO CLÁSICO DE LA ECONOMÍA PERUANA, POR LO MENOS DESDE 1950, presenta un conjunto de constantes que pueden ser resumidas de la siguiente manera: (a) *fases de alza*, con expansión del sector primario exportador, abundancia y abaratamiento de las divisas, crecimiento de la actividad económica interna, aumento de los salarios reales, incremento de la presencia estatal en la economía; (b) *fases de desequilibrios*, con las importaciones sobrepasando los niveles de exportación y generando crisis del sector externo, reducción del stock de divisas y devaluación, freno a la actividad económica, caída de salarios, déficit del fisco.

Este esquema, guardando las particularidades de cada etapa, se vio confirmado, en lo fundamental, dentro de un espacio de más de 40 años. Para comprobarlo bastaría revisar los siguientes tramos históricos relativamente recientes: 1950-56 (ascenso), 1957-58 (crisis), 1959-66 (ascenso), 1967-68 (crisis), 1969-1973 (ascenso), 1974-1979 (crisis), 1980-82 (ascenso), 1983-1984 (crisis), 1985-1986 (ascenso), 1987-92 (crisis). Es al llegar al nuevo ascenso de 1993 que se descubren caracteres singulares en el funcionamiento de la economía. Contra todos los pronósticos coinciden una fuerte brecha comercial externa, con la subida del producto. El abaratamiento del tipo de cambio, con la no mejora de los salarios en soles. El sector público expande su presencia económica a pesar del credo liberal en boga.

Se ha roto la lógica tradicional. Y, para explicar porque ha pasado eso, es preciso referirse a las circunstancias que han rodeado a la economía peruana en los 90. Suponer un alza económica que carezca de impulso externo (exportación) e interno (salarios elevados), apoyada en capitales excepcionales de origen externo (privatizaciones, capitales de corto plazo), jalada por el comercio de importación y las obras públicas, configura un piso mucho más precario que el visto en etapas anteriores. Lo que logró hacer fuerte el esquema económico

fujimorista es, paradójicamente, su fundamento político. Cuantos hablan de la eficacia con la que el "modelo" habría logrado poner fin a la hiperinflación y recuperado el producto, pierden de vista que aquí no han habido políticas económicas mayormente diferentes a las aplicadas en el Perú y otros países desde finales de los 70 y a lo largo de la década anterior. Si en un caso hubo fracaso y en otro éxito, la razón no ha sido técnico-económica sino de escenario y correlación política.

Hasta la coyuntura 1987-1988, la crisis peruana había tomado dimensiones crónicas. Cada vez más débiles y efímeros momentos de recuperación, por más profundos y largos tramos de caída, crearon una sicología colectiva de crisis permanente. En 1982, Manuel Ulloa, que se preciaba de liberal, afirmó que el país debía aprender a convivir con la inflación. En 1987, Alan García se refirió al desorden aparente de la sociedad peruana, en el que las cosas encuentran su forma particular de ordenarse. Uno y otro advertían la existencia de un empate catastrófico en el plano social, la aparente imposibilidad de cada una de las clases y sectores en pugna para hacer prevalecer sus intereses sobre los demás.

Sólo la situación límite alcanzada por la hiperinflación, con la contundencia de sus cifras de cuatro y cinco dígitos y con la evidencia de un Estado impotente para controlar las tendencias de desborde, rompió la inercia y abrió el camino a un desenlace. Con Alan García la crisis maduró hasta dónde le era posible sin una ruptura de los equilibrio sociales. Todas las hiperinflaciones tienen que acabar más o menos rápido, porque, de otra forma, ellas acabarían con el Estado. Casi todas las hiperinflaciones empujan hacia *soluciones políticas*: revoluciones o contrarrevoluciones. Eso ocurrió en el Perú.

El año 1988, Alan García estaba acorralado. Los datos económicos traducían la fragilidad de su gobierno y su acercamiento al F.M.I. confirmaban la bancarrota total de su falso nacionalismo. Las páginas del diario *Expreso* de la época registran el proceso de reencauzamiento del presidente aprista hasta llegar a forzarlo a tomar medidas para intentar ordenar la economía en función al pago de la deuda externa, el equilibrio de las cuentas fiscales y la recuperación de la ganancia capitalista. Es exactamente lo mismo que buscó más tarde el fujishock de agosto de 1990. Ni uno ni otro programa garantizaba nada acerca de la inflación.

Con medidas del tipo de subida de tarifas e impuestos, freno a los salarios, el APRA de 1988 lanzó los precios tan arriba como pudo (100 % en un sólo mes), pero no los pudo estabilizar a mediano y largo plazo. Mientras que Fujimori, con determinaciones equivalentes, pero aún más drásticas logró un verdadero record mundial (400% en un sólo mes), pero pudo luego ir ingresando lentamente en una curva de descenso. En ambas coyunturas los ganadores fueron los acreedores externos y los grandes intereses privados; pero en la segunda no hubo resistencia significativa de los afectados. Esta fue la condición de la estabilización: la derrota social derivada de aceptar como inevitables la expropiación de salarios y condiciones de vida para el pueblo.

¿Por qué los mismos que hicieron frente a los ajustes previos, no se decidieron a levantarse frente a Fujimori?. La respuesta está, en principio en lo largo y extenuador de la crisis, pero también se halla, en gran medida, contenida en el significado de lo que fue la elección de 1990. Que la idea del shock estabilizador (reestructuración de los precios a partir de disposiciones en paquete dictadas por el gobierno), que había sido multitudinariamente vencida por los votos, se convirtiese en el más brutal *supershock* ejecutado por el chinito de los pobres, tenía que funcionar paralizando y desmoralizando sus aluviónicas bases. Las gentes de clase media y alta, reprochaban ahora a los sectores populares haber elegido al presidente que echaba al cielo los principales precios, afectando la vida de todos.

El desconcierto estaba además agravado por la actitud de los partidos, de derecha, centro e izquierda, que sin muchos trámites se pasaron, en un caso, del odio cerril al candidato al apoyo activo al presidente; y, en el otro, de la oposición a rajatabla al ajuste brusco a su aceptación como "inevitable" medida de gobierno. El inicial gabineta multipartidario, encabezado por Hurtado Miller, de la derecha acciopopulista, e integrado por personalidades diversas, incluídos algunos de la izquierda, al que se le sumaba el apoyo de la totalidad del Congreso, reflejó este realineamiento político en torno a la defensa y viabilidad del Estado, ante el riesgo que suponía el crudo aislamiento en que arrancaba la gestión presidencial.

Pero, también, entraba a jugar un cambio más profundo en las expectativas sociales. La actitud hacia Fujimori implicaba una gran distancia respecto a lo que fueron las esperanzas tejidas ante los

gobiernos anteriores, militares y civiles. Con Velasco se vivió el mito de la "revolución militar" que encendió entusiasmos; con Belaúnde se creyó en la posibilidad de una etapa de crecimiento económico con empleo y de paz social; con Alan García se llegó a imaginar que realmente se estaba cerca de un futuro diferente. Pero a Fujimori no se le pedía nada de eso. Las expectativas de la nación respecto a lo que podía darles el Estado y el gobierno de turno, habían descendido al mínimo. En muchísimas personas estaba presente la idea que lo único que le tocaba hacer al poder era reducir los indicadores de precios y detener la violencia.

El shock no suscitó la protesta que se hubiese visto en otro tiempo, porque el pueblo peruano, a falta de otros caminos, optó colectivamente por esperar a ver que pasaba con el nuevo presidente. Carente de planes y programas, Fujimori terminó siendo visto como el que de repente escondía un secreto detrás de sus silencios. Un gobierno de origen absolutamente diferente a todo lo que antes hubo, tenía que sembrar, por lo menos, la idea de que merecía un compás de espera. Aunque la expectativa en este caso fuese de una elementalidad rotunda. El paquetazo del 8 de agosto demostró que la clave de la estabilización era una nueva disposición de las clases sociales.

No es verdad que las medidas del fujishock fuesen de todos modos "necesarias" para un eventual proceso de estabilización y recuperación económica. Todo depende del enfoque que se adopte. Y Fujimori optó claramente por subordinarse a la dirección del F.M.I. y aceptar como palabra indiscutible el punto de vista de los acreedores. En 1990 el recién electo tenía en cartera un "plan de ajuste para no hacer el shock", elaborado por su plana de asesores entre primera y segunda vuelta, que nunca intentó poner en práctica, a pesar de haber sido su estandarte electoral. El temprano viaje a tratar la perspectiva económica del Perú en Washington, desembarcó a su equipo económico y lo puso en manos de los tecnócratas del Fondo. Era una opción. Y ella implicaba lanzar, en una sola vez, un recorte de los salarios en 50%, empobrecer la vida de más de dos tercios de la población peruana, echar al abandono los servicios sociales del Estado, empujar un retroceso de la producción sobre el 10% en un año.

Cuantas veces se ha ensalzado el "espíritu de sacrificio" de los peruanos para aceptar y aguantar las brutales condiciones de 1990-

1992, se ha estado aludiendo en verdad al fondo de desarme y derrota de la sociedad frente a la inposición del plan del F.M.I., a través de Fujimori, con la virtual anuencia de todos los partidos.

La reforma neoliberal de Carlos Boloña., comenzada en 1991, halló piso en las decisiones iniciales del gobierno. La sociedad ya tenía entonces la guardia baja. No sólo en la debilidad de respuestas de las organizaciones de masas, las huelgas como las de Centromin y Sutep, no hicieron pestañear al gobierno, sino también en el plano de la formulación intelectual y las propuestas políticas. Mes a mes las críticas a la liberalización y desregulación de los mercados, y al programa de privatización del patrimonio público, fueron perdiendo energía y convicción, hasta la cristalización de un aparente consenso nacional, en el que, aún los más reacios, renuncian a ubicarse contra la corriente general.

La reforma trajo un predominio aplastante de lo externo por lo interno, que suele ser adornado como el normal ingreso a la modernidad y a la era de la globalización económica. En el Perú se venden ahora muchos más productos importados, nuevos o de segunda mano, que los producidos nacionalmente. Los bancos y las bolsas de valores mueven cada ves más dinero de corto plazo de titulares extranjeros, que fondos originados en el país. Las empresas públicas se van convirtiendo, una a una, en propiedad de transnacionales, mientras inversionistas foráneos se asocian con sus colegas locales en toda suerte de negocios. En la lista inmediata de venta se encuentra Petroperú la entidad empresarial más grande del país en trance inminente de desnacionalización.

A partir de 1993, el resultado de la actividad económica nacional se torna en azul (6.5%) y empieza una curva ascendente. En el 94 se logra una celebrada marca: 12.9%, y en el primer semestre del 95 se llega a 9.5%. Con estos guarismos el presidente hizo anuncio que el Perú había comenzado su propio "milagro asiático" y dijo que muy pronto se tendría en casa un nuevo tigre industrial del Pacífico. Numerosos editoriales periodísticos echaron incienso a la buena nueva. Muy pocos entraron a desmenuzar el armazón exacto de este crecimiento y sus posibilidades de sostenerse en el tiempo. Resulta algo más que una ironía que fuera el F.M.I. el que advirtiera los riesgos de este milagro excesivo y exigiera colocar un freno que ha terminado por afectar la atmósfera económica en la segunda mitad de 1995.

En marzo del 95, en plena efervescencia presidencial sobre el futuro de la economía, el ministro de economía suscribió la enésima Carta de Intención con el F.M.I., que debía servir para cuadrar las cifras del año ya comenzado. Pero en ese documento que suele ser dictado por los técnicos fondistas y firmado por las autoridades peruanas, se establecía que para el año 1995, una tasa de crecimiento superior a 6 o 7%, entrañaba un riesgo excesivo. Se hacía referencia a los problemas de desbalance externo y pérdida de divisas, al sobregasto fiscal, y a las dificultades en que podría encontrarse el gobierno para atender sus compromisos de pago de deuda que son sumamente duros en 1996. Decían todo esto, sin embargo, cuando habían transcurrido ya tres meses a un ritmo de aumento por encima del 10%, por lo que se estaba obligando al gobierno a ajustar muy hacia abajo el resto del año.

El auge de la industria de la construcción, con registros de 13% en 1993, 34% en 1994, y 31% en el primer semestre de 1995, era quizás el reflejo más claro del tipo de ascenso económico en la era fujimorista, en la que la ortodoxia liberal llega acompañada de un Estado inductor de crecimiento, en el más crudo estilo keynesiano. Justamente contra este esquema ha estado dirigido el principal golpe en los términos de la Carta fondista. Para que el gasto público descienda cuando menos cuatro puntos, se ha forzado una reducción de obras públicas que ha hecho caer la construcción a un nivel de 3%. No se sabe todavía lo que será el año siguiente, si se toma en cuenta que el presupuesto consigna una bolsa grande para el Ministerio de la Presidencia, piloto de las obras fujimoristas. Lo que es evidente es que el esquema tiene los pies de barro y se para a la menor protesta de los organismos internacionales.

Los altos indicadores de crecimiento a partir de 1993, se verificaron, de maneras desiguales en todos los sectores de la economía. Pero hacia mediados de 1995 ya se tenía un registro negativo en agricultura y una baja vertical en la industria. Estos dos sectores, los más importantes del cuerpo económico fueron jalados al alza del 94, en un caso beneficiándose del año climático y en el otro de la puesta en marcha de capacidad ociosa. Esto no pudo continuar aún antes del grito de alarma del F.M.I.

Es seguro que al cierre del año las cifras sean aún más lamentables. Las organizaciones de productores agrarios denunciaron la tremenda

barrera de precios a la que deben enfrentar cuando incrementan su oferta; pero el gobierno no ha hecho nada al respecto. Los industriales se quejan de competencia desleal de productos importados y de costos energéticos y tributarios excesivamente altos; pero el gobierno no ha hecho tampoco nada sobre el asunto. Un milagro económico sin agricultura e industria no tiene sentido.

Apostar a los productos primarios exportables es más que riesgoso. El 94, la actividad pesquera creció en nada menos que 31%, pero en el 95 se estima que descenderá en más o menos 15%. La minería, sostenida en la explotación del hierro de Marcona y el oro de Cajamarca, subió en 8% en el 94, pero en el 95 lo ha hecho apenas en en 2%. Sólo el sector de comercio, particularmente el que se beneficia del auge importador, se ha mantenido sobre tasas de 15%. Pero nadie puede creer que un país tenga futuro como consumidor acelerado de las mercaderías que producen otros.

¿Hay razón para la alarma que muestra el Fondo y para la aplicada aceptación del gobierno a sus exigencias?. Que hay problemas en el diseño del famoso "modelo peruano" que son nubes de futuras tormentas, no cabe duda. La economía peruana está haciéndose cada vez más dólar adicta. No sólo porque se compra más al extranjero que lo que se le vende, sino porque las transacciones internas se realizan, en su mayoría, en moneda norteamericana, el ahorro se mantiene tercamente dolarizado y el propio Estado realiza buena parte de sus operaciones y registros en billetes verdes.

El gobierno actual obliga al país a vivir de una interminable venta de sus escasos activos que, como todo en la vida, ya van camino de acabarse, y de la recepción de capital especulativo, sobre el cual hay siempre que cubrir costos excesivos, y el que puede escaparse en cualquier momento creando crisis de pagos inesperadas. La economía de la cocaína que fue la reserva no declarada por varios años, se encuentra deprimida por efecto de la represión y del cambio en las preferencias en los consumidores. Por tanto de aquí tampoco vendrán flotadores para sortear una próxima coyuntura de escacez de divisas.

El porvenir del Perú, de aquí a dos o tres años, es más que dudoso. ¿Pero es ese el motivo de las preocupaciones fondistas?. Todo indica que no es así. Son más bien las angustias del cobrador de adeudos las que se han puesto sobre la mesa. En febrero-marzo de 1995, las calculadoras de los funcionarios del F.M.I., indicaban que el ritmo de

gastos que se venía produciendo hasta ese momento, llevaría a problemas en la caja fiscal y en el nivel de reservas, que serían una mala carta de presentación para las negociaciones del siguiente año. En la lógica de estos inspectores económicos los países con dificultades de pago, deben mostrar que han hecho "el mayor esfuerzo que les es posible", para entonces poder acogerse a alguno de los planes de reestructuración de sus obligaciones. No se hubiese abierto camino a la firma del Acuerdo Brady en el segundo semestre del año, si no se hubiese atendido la presión de la tecnocracia internacional para cerrar el caño al gasto público y hecho caja para los pagos del año siguiente.

En 1996 se debería cumplir con los imposibles desembolsos del Club de París y los organismos internacionales, aceptados en las anteriores tratativas de este mismo gobierno. Ahora además la exigencia se redobla por que hay que abonar más de mil millones de dólares como "gesto de buena voluntad" para que puedan entrar en vigencia los alcances del Brady. Todos saben que se marcha a una nueva renegociación, con todas su secuela de pulseos e imposiciones. Al final de 1995, la economía peruana ha perdido el ritmo vertiginoso de crecimiento, pero se ha reencauzado en los rieles del control financiero internacional. La contradicción entre crecer y pagar la deuda se hace nuevamente patente.

Pero no es sólo en el campo de las grandes variables económicas donde se anotan los dilemas actuales y futuros del fujimorismo económico. En la propaganda reeleccionista se decía abiertamente que durante la estabilización "no se podía crear empleo". En verdad se destruyeron cientos de miles de puestos de trabajo. Pero esta confesión de parte advierte con precisión que no fue "descuido" ni "falla en el modelo", lo que generó el desempleo y subempleo agravados que hoy se observa. Los opositores del actual régimen le hacen un gran favor, cuando le recomiendan tomar en cuenta estos aspectos como si tratara de un olvido involuntario. Sin embargo, está a la vista que la política en curso ha buscado producir conscientemente un vuelco radical en la relación histórica entre salarios y utilidades en claro beneficio de las empresas en la lógica de hacer más atractiva su inversión.

La rebaja de los salarios reales se impuso durante el proceso de estabilización y ajuste, cuyo contenido fue abaratar la mano de obra interna, y ha sido mantenida en base a la inmensa presión del

desempleo masivo y al debilitamiento de los mecanismos de defensa de los trabajadores. Incrementar los niveles de ocupación productiva conllevaría tender a desaparecer el colchón de demanda de trabajo existente; y a menor desempleo efectivo, sería inevitable la subida del salario real frente a las utilidades, y esto es lo que no se quiere. Los nuevos dogmas del trabajo flexible y la desregulación exigen que el factor costo laboral se convierta en una variable mucho menos amarrada al crecimiento que en épocas pasadas. El F.M.I. se ha dedicado a probar en todo el mundo, con el concurso de los Fujimoris, los Camets y otros, que se hace recesión generando desempleo y bajos salarios, y se hace crecimiento sin devolver los puestos perdidos ni recuperando los salarios deteriorados.

El *crecimiento sin distribución* corresponde al esquema contemporáneo de economía de mercados abiertos. Aquí lo que cuenta es quién gana y no quién se perjudica. Que esto trae polarización social, no tiene la menor importancia, para que unos sean ricos muchos otros tendrán siempre que ser pobres. Un esquema de círculos concéntricos, en el cual los que están más adentro y más cerca del poder se benefician mucho más de los que van quedando fuera, es común a todos los ajustes y reforma neoliberal.

En el Perú, sin embargo, la desigualdad y marginalidad que ya existía era tan abrumadora que la distancia a la que han venido a ubicarse los núcleos privilegiados de los excluidos de la política económica, resulta alucinante. Mientras que en naciones con estructuras sociales previamente más equilibradas (Chile, Argentina, Uruguay), los problemas de manejo del ajuste se han planteado en la relación con los asalariados, empleados y obreros, que perdían capacidad adquisitiva, y la atención a los sectores más pobres ha podido ser un tema relativamente complementario; en el país la masificación de la cuestión social (pobreza, desprotección), ha hecho obligatoria una fuerte intervención paliadora de parte del Estado.

Lo original es que bajo Fujimori ha renacido un impensado populismo neoliberal, una acción social sistemática del poder público. Esto tiene, por cierto, su arista pancista, que se aprecia cuando las "obras sociales" son también buenos negocios para los constructores, incluída la familia Camet. Pero también tiene su lado político-social, desmovilizador de eventuales protestas, propiciador de un voto pasivo de los desposeídos hacia su presidente benefactor. Más aún encierra

una trampa divisionista en el seno del pueblo, ya que sirve para contraponer a los sectores organizados con los no organizados, a los asalariados con los pobres absolutos, receptores de la política social. Reducidos a la sobrevivencia más elemental, a las masas empobrecidas poco podía interesarles si los sindicatos no eran atendidos, si los salarios eran bajos, o si no se ampliaba el empleo en la economía formal.

Mal que bien, se encontraron frente a un presidente especialmente preocupado en hacer algo por ellos y en presentarse como portavoz de sus problemas; no importaba si lo hacía para ganarse sus votos o para enrolarlos en la lucha antisubversiva. Un rayo de esperanza visitaba los pueblos jóvenes y distritos rurales. No porque se estuviera haciendo algo serio frente a la extrema pobreza, sino porque eran demasiados años sin que se hiciera nada por ellos. Trasladar a una enorme porción de la población más abajo de los límites primarios de la subsistencia, conlleva a su vez rebajar el ejercicio de la economía y la política a un plano de completa elementalidad. Es en aquel plano en que se termina por perder de vista quién fue el responsable principal de las miserias, y se le concluye festejándolo como el "único presidente que se acordó de los pobres".

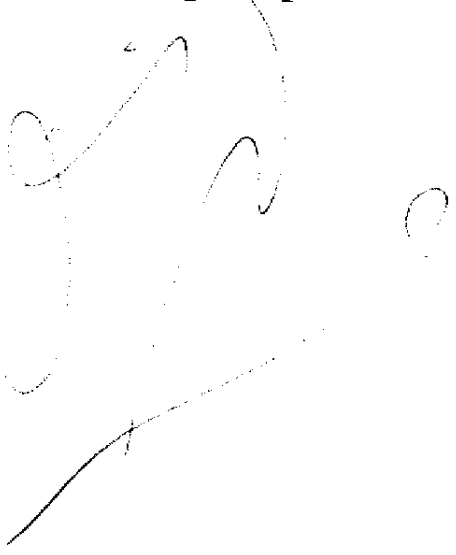
El pensamiento económico neoliberal, hoy hegemónico en el mundo entero, ha tenido la pretensión de llegar a durar a muy largo plazo. Es como si sus propagandistas quisieran dejar a un lado que el ajuste y la reforma neoliberal son, ante todo, respuestas de crisis del sistema capitalista que encuentra cada vez más obstáculos para funcionar en términos normales. El ajuste mundial es un proceso de redistribución compulsiva del ingreso entre las naciones y las clases, que aspira a otorgarle un tiempo adicional de superganancias al gran capital. Pero esto no es sino un camino hacia nuevas y mayores caídas y ajustes adicionales. Lo prueba el crack mexicano de diciembre de 1994. A partir de entonces ha salido del terreno de las hipótesis la tendencia estructural de las economías abiertas a sufrir tremendos remezones a causa de las ondas de los capitales internacionales.

En el Perú se dice que hay, por ahora, las reservas suficientes (cerca de 6 mil millones de dólares, casi un año de importaciones), como para soportar una fuga brusca del dinero extranjero puesto en bolsa y en la banca. Puede ser, pero la perspectiva es a consumir estos fondos, con una capacidad de reposición cada vez más reducida. El

proceso de privatización, por ejemplo, luego de haber procurado ingresos cercanos a los 5 mil millones, podría según cálculos oficiales obtener, como máximo, unos 3 mil millones más. ¿Y después qué?. La creciente brecha entre importaciones y exportaciones (actualmente el déficit comercial del Perú sobrepasa el 25% del monto total exportado) será de cada vez más difícil manejo. Y cuando empiecen a escasear las divisas no habrá cómo sostener la actual estructura del gasto público, incluido el pago por deuda externa.

Es cierto, sin embargo, que no hay nada de automático entre la crisis de viabilidad del neoliberalismo, y su reemplazo por una orientación integralmente alternativa. En México se ha probado que se puede repudiar al neoliberalismo y pasarse un largo tiempo sin encontrar la puerta de salida para escapar de él. Por ahora lo que las crisis pueden hacer es debilitar la confianza en las recetas de ajuste y llegar a aislar a los gobiernos. Y quizás de allí recién vengan las condiciones para un cambio de rumbo. Puede suponerse que en uno o dos años los baches que ya se ven en el fujimorismo, serán mucho más evidentes.

Cuando empiecen a faltar divisas y el fisco reduzca su margen de manejo, se acelerarán las corrientes hacia un nuevo ajuste y es muy probable que, en ese instante, Fujimori llegue a ser un obstáculo adicional para tomar medidas duras y antipopulares que podrían liquidar su capital político. Como sea el efecto de los desarreglos económicos será probablemente lento, pero inexorable. Este documento no pretende hacer predicciones de catástrofe. Hay cambios de contexto internacional y coyuntura política que no pueden anticiparse a estas alturas. Lo que aquí se puede indicar es el rumbo por el que marchan los acontecimientos, para poder actuar sobre ellos.



Capítulo II
Negocios son negocios

ESTÁN CAMBIANDO LOS RASGOS CENTRALES DE LA CLASE BURGUESA EN EL PAÍS: SE DESNACIONALIZA EL CAPITAL, TANTO POR EL AUMENTO DE PROPIEDAD EN MANOS DE EXTRANJEROS, COMO POR EL INICIO DE LA TRANSNACIONALIZACIÓN DE ALGUNOS GRUPOS NATIVOS.

LOS PROPIETARIOS ESPAÑOLES DE LA TELEFÓNICA DEL PERÚ confesaron hace poco, en tono de chanza, haber cometido "un error de cálculo" al momento de decidir invertir 2 mil millones de dólares en el Perú. En efecto, ellos imaginaron en el mejor de los casos recuperar su capital en más o menos diez años, e incluso tuvieron dudas cuando sus connacionales le criticaron haberse subido demasiado en la oferta de compra. En 1994, sin embargo, las utilidades netas de la Telefónica superaban el tercio de lo invertido, y en el primer semestre del 95 se había obtenido resultados equivalentes a todo el año anterior. En consecuencia la vuelta del capital se producirá mucho antes de lo soñado y los compromisos para colocar dinero fresco podrán derivarse simplemente de los beneficios hechos en el país.

Sin duda un gran error de cálculo de los telefónicos españoles que no sabían cuán suculento iba a resultarles el negocio de la explotación monopólica de las telecomunicaciones peruanas. Ninguna magia especial ha sido, no obstante, requerida para llenar las arcas de la empresa privatizada. Ha bastado el elemental procedimiento de subir las tarifas tanto como fuese posible, sin que exista competencia ni control que pueda equilibrarlos. Vender líneas para colocación futura cuya instalación demanda muchos meses, y reducir sin contemplaciones la nómina de trabajadores antiguos y los derechos laborales. Así los usuarios internos y los empleados y obreros de la compañía, son los que están pagando los precios de transferencia, expansión y las remesas en dólares que muy pronto estarán llegando a la madre patria.

La privatización ha erigido a la Telefónica del Perú, en la empresa privada de mayores ingresos. En 1994 sus utilidades, según la CONASEV, se aproximaban a los 1,500 millones de soles, superando ligeramente los resultados de la Southern Peru Cooper Corporation, que hasta ahora sigue siendo el primer consorcio minero privado del país. En los siguientes puestos del ranking de utilidades figuran el Banco de Crédito, el Banco Continental y el Wiese. Los datos de la

CONASEV, indican que, en 1994, las cinco primeras empresas privadas sumaron ingresos por cerca de 5 mil millones de soles (2 mil 200 millones de dólares). Y según esta misma entidad son 24 las empresas que tuvieron utilidades de más de 100 millones de dólares en el año 94, generando beneficios en el orden de más o menos 4,500 millones de dólares, aproximadamente un 10% del PBI nacional.

Es evidente, por lo demás, que se deben esperar cambios adicionales en la estructura de la propiedad empresarial en los meses y años que vienen. Por vía de la privatización se plantea sacar de la esfera pública y llevar al sector privado desnacionalizado, a las últimas entidades importantes: Petroperú, Electroperú, Centromín, a las que, además, se intenta trocear para convertirlas en una cantidad de unidades pequeñas, que puedan colocarse más rápidamente en el mercado. De igual modo se intenta salir de las últimas plantas pesqueras del Estado, de Sider y las empresas del agua. En varios casos se habla de la opción de vender activos y no empresas acentuando los rasgos de remate y liquidación de saldos que va tomando la privatización.

Otras variaciones en la estructura de propiedad están llegando a través de traspasos, fusiones, absorciones, entre diversas razones jurídicas privadas. Lo que prácticamente no se encuentra es nueva inversión, creación de fuentes de riqueza y trabajo que antes no hubiesen. El capital se mueve, crece y se hace más fuerte, pero, como hace la Telefónica, logra estos propósitos aumentando la tasa de explotación de los factores ya existentes.

De la lista de principales empresas privadas se extraen algunas verificaciones: las dos más importantes son extranjeras (España y EE.UU.); la tercera es el primer banco nacional, con un proceso en marcha para transnacionalizarse; la cuarta empresa es un banco recientemente privatizado y españolizado; y el quinto es otro banco de capitales nativos que busca afanosamente ser tomado en cuenta en las bolsas internacionales.

De las 24 empresas con ingresos arriba de 100 millones de dólares, la mitad son de propiedad mayoritaria de extranjeros; cinco pertenecen al sector de banca y seguros, siete a las industrias de alimentos y bebidas, cuatro al minero-petrolero, dos al comercial, una al sector telecomunicaciones, una al pesquero, cuatro a otras ramas de la industria.

En definitiva la más selecta élite burguesa está incorporando rasgos novedosos: capitales más grandes y concentrados; fuertes utilidades en plazos breves; reasociación extranjera-nacional, con mayoría de capital y de acciones del inversionista externo, pero con participación de los capitalistas nativos en funciones de administración; peculiar poder de los bancos, que muy probablemente se siga extendiéndose en la próxima etapa; crecimiento del capital comercial y de los grupos constructores; nuevas estructuras empresariales en la administración de la tierra; finalmente, donde más escasas son las modificaciones es en el sector industrial manufacturero en el que siguen prevaleciendo las añejas empresas de la rama alimentaria (La Fabril, Backus, Gloria, Nicolini), mientras se mantienen replegadas las líneas supuestamente modernas como la metal-mecánica, electricidad, artefactos, material de transporte, que fueron despanzurrados por la crisis.

El surgimiento de Credicorp, primera transnacional proyectada desde el país, constituida por integración de los capitales de tres empresas del grupo Romero, una de ellas con registro en Gran Cayman), aparece como el síntoma más notable de reacción de parte de algún sector de la gran burguesía peruana, por ensanchar sus negocios para hacer frente a la penetración del capital foráneo. La mayoría de los inversionistas locales han escogido claramente ser cola de león en medio de la ofensiva que viene de fuera, como se ve con el grupo Piazza en la Telefónica, al Brescia en el Continental, a Pardo Mesones que ha vendido el Banco Financiero a los españoles, etc. La burguesía peruana, en línea general, se ha venido quedando muy atrás de sus pares chilenos, que son hoy fuertes inversionistas dentro de América Latina y en el Perú, ni que hablar de los mexicanos que se han atrevido a incursionar sin complejos en Europa y Estados Unidos, integrándose a la élite mundial de los negocios.

El caso del Credicorp, por su originalidad, suscita inquietudes sobre todo en los que conocen de las artes mercantilistas de Dionisio Romero, bastante distantes de la imagen de modernidad que venden sus avisos publicitarios. En los hechos el Credicorp, busca disolver, para efectos tributarios y bursátiles, la entidad peruana llamada Banco de Crédito. Esto permitiría competir como banco extranjero, sin obligaciones de encaje y declaración de depósitos, en el mercado financiero nacional. Podría por tanto estar marcando un patrón de conducta de la burguesía en relación al trato privilegiado que recibe

todo dinero que llega del exterior. Se estaría así caminando a concretar otra vía de la desnacionalización que sería la del gran capital nacional afincado en el extranjero y desligado de cualquier control nacional sobre sus negocios.

De paso además los Romero están dando una pauta de cómo reducir la participación de los accionistas minoritarios sobre el total de la propiedad de las empresas. Con la nueva corporación la familia propietaria se está haciendo titular de más del 50% de las acciones, por lo que ya no tendrá que armar diversas coaliciones con otros grupos para dirigir los destinos de la empresa. Cuando se oferta canjear papeles del Crédito por los del Credicorp, se dice que estos últimos pagarán más altos beneficios. Podría ser más adelante, aunque por ahora lo que está pasando es una desconfianza hacia los nuevos valores. Lo que, sin embargo, se escamotea, como si no tuviera ninguna importancia, es la cuestión del poder empresarial. Todo indica que en estos tiempos de modernidad y competencia enconada, los más poderosos grupos económicos juegan mucho menos a la democracia y al "capitalismo popular", que lo que suelen anunciar los gurus del neoliberalismo.

Los cambios en la estructura de la clase burguesa son consecuencia indiscutible del programa económico ejecutado por el gobierno. Esto dice mucho de la facilidad con la que se moldean no sólo los cerebros, sino las realidades materiales sobre las que se conforma el dominio del capital en el país. Se ve que las grandes empresas están aceptando un nuevo escenario de economía abierta y reasociación con el capital extranjero, a pesar que esto les pueda traer a algunos dificultades muy grandes para operar y a otros una cierta merma de poder.

Descontentos burgueses con Fujimori los hay. Pero a pesar de las diferencias sobre aspectos de manejo concreto de política: aranceles, precio del dólar, vigencia de determinados impuestos y niveles en las tasas de cobranza, etc., es indudable que está funcionando un compromiso no escrito entre el poder político y el económico para que el programa neoliberal siga adelante.

El presidente electo en 1990 con el voto más clasista y antiburgués que se recuerde, fue reelecto cinco años después con el asentimiento casi unánime de los directorios de la gran empresa. Del peligro de caos que parecía rodear el inicio de la aventura fujimorista, se pasó sin trámite a la santificación del ingeniero presidente convertido en

único garante contra el mismo caos que, en la imaginación empresarial, está siempre latente en este impredecible país. El temor al cambio, por más mínimo que sea, ha concluido por hacerse endémico entre la burguesía, al punto de haberse llegado a hablar de "los riesgos" que podrían haber resultado de una hipótetica elección del apacible embajador Pérez de Cuéllar. En cinco años los hombres de negocio aprendieron que lo mejor que les pudo pasar fue que quedara a un lado la idea de una presidencia del gran capital como la que prometía Vargas Llosa, y que fuese reemplazada por la de un gobernante con ascendiente popular, dispuesto a trabajar para ellos.

Al comienzo de 1991 Fujimori echó a un lado a sus últimos ministros con relaciones de partido. Hasta 1993, con Boloña, se mantuvo una presencia tecnocrática significativa en decisiones de gobierno. La que no ha sido descartada, en cambio, es la participación de ministros empresarios. El caso de Jorge "Kenji" Cámet, ministro de industrias inicialmente, y luego titular de economía durante tres años, es particularmente demostrativo.

Ubicado en la cumbre del poder, el nada locuaz ministro ha servido de correa de transmisión de todas las presiones externas sobre el país, al punto que en varias oportunidades el F.M.I. ha solicitado que se mantenga en el cargo; y ha sido, a la vez, el parapeto, de las quejas de la Sociedad de Industrias o la Asociación de Exportadores contra los aspectos de la política económica que estos sectores consideran desfavorables. Muchos tienden a preguntarse si es el flemático Cámet, que sirve al Fondo y a la banca mundial, a Fujimori y a la empresa constructora de su propiedad, ahora bajo gestión de sus hijos, casualmente ganadora de licitaciones con el Estado, o el quejoso señor Farah de la S.N.I., quién mejor traduce el espíritu burgués de esta época.

Para comprender por qué la banda presidencial se da tan fuertemente la mano con la bolsa empresarial, hay que referirse, ante todo, a la excepcional tasa de ganancia de los últimos años. La reactivación económica registrada hasta la fecha ha sido un festín de la burguesía, vista la situación anterior y la realidad penosa de los salarios reales. Pero eso no es todo. El guillotinamiento del movimiento sindical, es una prenda que se le agradece al tirano cada día. La derrota de Sendero y la imposición de un régimen de fuerza, son muy al gusto de la idea de *seguridad en los negocios*, que hoy se difunde en la sociedad peruana.

¿Qué empresario estaría interesado en moverle el piso a tales realidades, por alguna idea abstracta de "democracia", "derechos", u otros conceptos que no figuran en los libros contables?. En el Perú de los 90 todo tiene una explicación, inclusive, que el presidente con el mayor arraigo entre los pobres, sea también el que haya podido desarrollar la más larga y sólida alianza y cogobierno con los más ricos. O que los grupos empresariales se aguanten en silencio que, de vez en cuando, el presidente les jale las orejas, como les ocurrió a las molineras por aguar la fiesta de 28 de julio con el alza del pan. Todos entienden que Fujimori tiene que jugar su rol arbitral, que es el que mejor le sienta, para poder cumplir con los objetivos del gran capital. Al fin negocios son negocios, lo que es mucho más que buenas razones.

Capítulo III
La dictadura no visible

La modalidad de gobierno extraconstitucional impuesta en 1992, sigue vigente hasta hoy, y no ha sido superada con la aprobación de la Carta de 1993, ni con la reelección.

MAL QUE BIEN, LA HISTORIA PERUANA HABRÁ DE SEÑALAR AL RÉGIMEN presidido por Alberto Kenyo Fujimori como uno de los momentos culminantes en el proceso de la formación del Estado nacional en el presente siglo. Mariátegui describía al Perú como una *nación en formación*, para advertir que la implantación del Estado sobre el territorio era precaria, que las relaciones de mercado eran apenas incipientes y que no había identidad cultural que abarcase a todos sus habitantes. Luis Alberto Sánchez, utilizó la expresión "país adolescente" y Basadre se refirió a esta misma inmadurez bajo la idea del "problema y la posibilidad" encerrados en la realidad peruana.

En 175 años de existencia republicana no se llegó a afirmar un sistema de representación política suficientemente aceptado que diera origen a una autoridad que no fuese fácilmente discutible. Por ello mismo se repitieron, una y otra vez, los momentos de excepción en los que regímenes providenciales intentaron elevarse por encima de la política y la sociedad para definirles un nuevo destino. En general los gobiernos elegidos y que buscaron funcionar con arreglo a los principios constitucionales que estaban vigentes no fueron capaces de producir reformas y reorientaciones importantes en el país. En cambio, fue por la vía de los procesos extraconstitucionales, de las rupturas profundas de la legalidad, que se fueron avanzando cada una de las transformaciones que han definido lo que es el Perú de estos días.

En el siglo XX se han producido *tres grandes modernizaciones del Estado*, todas ellas por mecanismos extraconstitucionales. La primera es la que se inaugura con el golpe encabezado por don Augusto B. Leguía, electo en 1919, y que antes de juramentar su cargo decide someter al Congreso, eliminar adversarios e instaurar una dictadura personal que iba a durar once años. Este fue el comienzo de un gran giro en la historia, por medio del cual irrumpieron las clases medias urbanas en la arena política, se canceló el viejo sistema de partidos

aristocráticos y, sin proponérselo, se dio origen a nuevas formaciones políticas; se abrió compuertas para el ingreso masivo del capital extranjero y para una mayor integración de la economía y el territorio nacional. La "democracia leguiísta" que hizo posible estos cambios, consistía en un sistema de reelecciones sucesivas del mismo presidente, un parlamento de incondicionales que no afectaba para nada el poder concentrado en el Palacio de la Plaza de Armas, un sistema judicial sumiso permanentemente reorganizado, una prensa servil y ayayera, y una cúpula militar mediocre al servicio del mandamás. Hay obvias semejanzas con lo que ocurre actualmente, que han sido remarcadas por varios autores.

La segunda modernización importante es la que estuvo a cargo del gobierno militar del general Juan Velasco, que puso en marcha un conjunto de reforma de contenido nacionalista y socializante que pretendían ser sustituto de la "revolución social", entonces convertida en asunto de aguda actualidad. En los hechos, sin emmbargo, el proceso de esos años se tradujó en la liquidación de la base económica y los remanentes políticos de la oligarquía y el gamonalismo, y en un impulso, totalmente involuntario, a la emergencia de diversos sectores populares, principalmente de la clase obrera y el movimiento campesino.

A partir de 1968, el Perú dio un nuevo salto en su articulación económica y vio configurarse una base social más amplia para la acción política. El régimen de Estado, superpuesto con la institucionalidad militar, se erigió, por primera vez en la historia, en ejecutante de una propuesta estratégica del alto mando para transforma al país, el poder armado, actuando por su cuenta, había diagnosticado el fracaso civil, y establecido lo que en su concepto sería la ruta del desarrollo y la "seguridad nacional".

Tanto el derrocamiento de Belaúnde por Velasco, y el cierre del Congreso por Fujimori para asumir todos los poderes, fueron en esencia operaciones militares preventivas para cambiarle el rumbo del país. Curiosamente fue en los cuarteles que nació el populismo radical de los 70, y en que se incubó el régimen de extrema derecha de Fujimori. Imaginados, ambos, como recursos de salvación de la patria y del orden existente, encuentran en este elemento de panificación y conspiración militar su más significativo elemento en común.

La tercera tentativa de modernización del Estado peruano, a cargo del régimen de Fujimori ha marchado, como sus antecesoras, del cierre de un sistema legal al nacimiento de otro, encerrando en los hechos un cierto grado de premeditación, y otro tanto de adaptación a las circunstancias, o pragmatismo como ahora le dicen. Los 90 fujimoristas corresponden a las coordenadas del mundo "globalizado", con las transnacionales del capital más fuertes e insaciables que nunca; con una ofensiva general contra los trabajadores y las ideas progresistas; son los del final de la guerra fría, que ha dado al sentimiento de victoria de la reacción mundial.

En términos nacionales, tiene que ver además con el desfondamiento del Estado populista, que era la versión criolla del "Estado de bienestar", y que perdió todo crédito cuando no pudo asegurar derechos reales detrás de las declaraciones formales. Los partidos de las clases medias y las izquierdas populares, vieron diluirse buena parte de su sentido precisamente por haber sido tributarios de tal tipo de Estado. Cuando fracasa la transacción social, se instala el mito de la eficiencia autoritaria. Del poder absoluto que debe coparlo todo y reemplazar a todos.

Las modernizaciones estatales han sido procesos de reforma burguesa, de cancelación parcial e incompleta de los esquemas sociales y políticos preexistentes. Pero ni por ser apuestas notoriamente limitadas, han podido realizarse por las vías regulares del sistema. La promesa reformista de Belaúnde en 1962 y 1963, contó no sólo con un vasto soporte social, sino con el apoyo explícito de las Fuerzas Armadas, las que creían imperioso transformar el régimen de tenencia de la tierra para evitarse una revolución agraria en el país. Pero el impetuoso arquitecto de las frases retóricas se ahogó de impotencia. Por ello vino el 3 de octubre y la dictadura de los doce años.

El segundo belaúndismo fue la reedición aún más derechizada y trasnacionalizada del primer gobierno. Un intento de giro neoliberal que se quedó a medio camino; que puso en crisis las empresas públicas pero no pudo venderlas; que abrió la economía pero no derrotó el proteccionismo; que volvió a meter a los militares en la política para que se hiciesen cargo de Sendero, diluyendo y tornando impotente la restauración civilista que era toda la razón de ser de su gobierno. Todo esto hizo más grave la crisis general y erosionó las ilusiones en la democracia.

Luego vino Alan García, el gobernante que gozó de los índices de aprobación y entusiasmo más altos de los que se tenga memoria, y el que cosechó, poco tiempo después, los más bajos niveles de desconfianza e incredulidad de todos los tiempos. Fue el perfecto régimen de la mentira populista. El que pareció haber llegado con soluciones para todo: pago del 10% de la deuda, heterodoxia para la economía, crédito cero para los productores agrarios, rimanacuys para las comunidades campesinas, aumentos salariales para los trabajadores y subsidios para los empresarios, comisiones de paz para la violencia, trenes eléctricos para Lima, gobiernos regionales para las provincias etc. Ya se sabe que todo esto fracasó en la vorágine de la hiperinflación y la guerra interna.

Ninguna reforma importante se hizo durante el gobierno aprista. Y su único intento de poner la mano sobre los grandes grupos económicos, con la frustrada estatización de la banca, fue derrotado por la presión conjunta de la reacción económica y política, incluida la que se expresaba al interior del APRA. García fue el gran enterrador de la democracia parlamentaria, sus partidos y sus dirigentes. Sobre su responsabilidad recae no sólo la insólita victoria electoral de Fujimori en 1990, sino también buena parte de aquello que iba a seguir hasta llevar a la inolvidable noche del 5 abril de 1992, incluida su crucifixión política, verdadera acta de nacimiento del fujimorismo como régimen político específico, consagración de su alianza con el poder económico y militar, y cierre con el frustrado período previo.

No es cierto que la constitución de 1979, se hubiese convertido en algún especial freno a las medidas de liberalización económica o de acción contrainsurgente que se propuso el gobierno. Los escribidores al servicio del régimen crearon, con posterioridad al autogolpe, el mito tramposo, que en esencia no era sino una coartada, acerca de que era "necesario cambiar la constitución" para concretar la reforma. Cargada de subterfugios, la Carta del 79, permitía que se le sacara la vuelta tantas veces como se creyera necesario. El legislativo podía conferirle al Ejecutivo atribuciones para dictar las leyes, que eran finalmente ratificadas después de un tiempo. Pero el Ejecutivo podía también dar decretos de urgencia, "con fuerza de ley". El estado de emergencia se declaraba por períodos breves, sin embargo podía renovarse en forma indefinida, eliminando las garantías individuales.

Los comandos políticos militares establecidos en 1983, duraron una década, aplastando las autoridades civiles. Y todo al amparo de la Constitución del 79. El problema no era su populismo o antiliberalismo, ni su humanismo o democratismo, sino que los Fujimori, Hermoza, Montesinos, habían llegado a la conclusión de que necesitaban que no hubiera *ninguna constitución real*, ninguna legalidad, que se opusiese a sus voluntades.

El carácter extraconstitucional del régimen se define cuando se hace admitir a la sociedad que las armas prevalecen sobre las normas escritas. Consentido el 5 de abril, sus gestores se han podido dar todavía el lujo de maniobrar sobre las presiones internas y externas que demandaban la "reconstitucionalización" como salida al embrollo golpista, y otorgarles en respuesta a sus reclamos, ese producto de la más acabada mediocridad que es la Constitución de 1993, aprobada por el CCD. Por supuesto que el contenido de este documento, exceptuada la cuestión de la reelección y la intención de reimplantar la pena de muerte, puede juzgarse casi irrelevante. Su función principal es cubrir la forma. Y dejar al gobernante seguir haciendo lo que quiera.

Los constituyentes fujimoristas ocuparon casi todo su tiempo en borrar derechos sociales y laborales. Argumentando para ello que estos no funcionaban o cubrian a sectores minoritarios de la sociedad. Esto que era un efecto evidente de la crisis; implicaba, sin embargo, una regresión gigantesca que la nueva mayoría tuvo el descaro de definir como el "comienzo de la modernidad". El artículo más importante de la Constitución fujimorista era, indudablemente, el que no estaba escrito. Aquel según el cual, las normas sólo son válidas en cuanto no entren en conflicto con los intereses y caprichos del emperador.

Sería totalmente erróneo y simplista imputar a los estilos prepotentes de Fujimori o de los generales que lo rodean, la mantención de ese clima de golpe de Estado permanente, que no se ha borrado desde la noche del domingo 5 de abril del 92. Lo esencial aquí es que si bien se cedió en lo formal al convocar al CCD, no se retrocedió un milímetro en las intenciones de fondo. El diseño del nuevo país económico y político, siguió por un cauce que no podía ser captado por los incompetentes y desinformados constituyentes, y por procedimientos que implicaban el uso del factor sorpresa, la anulación

del debate, la definición militar. En verdad aún está totalmente pendiente resolver la cuestión constitucional que quedó abierta con el golpe de Estado y la reforma neoliberal. Eso no le preocupa mayormente al gobierno que sigue adelante, creando a cada paso realidades que sobrepasan el marco legal del 93, y que lo condenan a ser el más precario y menos durable, de cuantos se han dado en el presente siglo.

Para un horizonte político más amplio, sin embargo, se desprende una conclusión significativa: *el proceso está aún muy lejos de lo que las constituciones de 1933 y 1969 implicaron para las dos anteriores reformas de modernización del Estado*. En esos casos la constitucionalidad fue un punto de llegada, que consagró y cerró la etapa de las reformas. El 93 fue apenas una transacción, y el conflicto por dejar resuelto como se institucionaliza el Perú del futuro continúa abierto. Es decir, cualquiera sea el sentido político de los acontecimientos de los años siguientes, el Perú llegará más tarde o más temprano a un remate constitucional, con todas las consecuencias que esto tiene para la acción de las fuerzas políticas.

La reforma continua del Estado supone una subversión sistemática del orden burgués. Es así que el reputado *gobierno del orden*, resulta irónicamente siendo, por el momento, el factor de mayor inestabilidad del escenario político, mientras persiste el reflujo de masas y el retroceso de las estructuras políticas organizadas. La forma como Fujimori instruye al país entero acerca de las formas para llegar al éxito en la política, se transforma en línea de conducta cada vez más generalizada. Más aún invita a plantearse el problema de si el comienzo de este régimen fue la fuerza, por qué no pensar que su final llegará por la misma vía.

Los sectores más interesados en el futuro del sistema han insistido, desde hace mucho, en los enormes riesgos que entraña un régimen tan personal como el que hoy existe. Y han reclamado en mil formar por el rol que deberían jugar las instituciones y las leyes. Mientras Fujimori sigue creyendo que el país debe darle, todos los días, las gracias por su inspiración de gobernante, y tolerar sus faltas de procedimiento porque le brinda resultados; sus críticos burgueses están cada vez más angustiados por la falta de un marco legal, aunque sea el de la muy criticada Carta del 93, que por lo menos sería algo sobre lo cual atenerse.

El institucionalismo, tal como se expresa actualmente, es un acto reflejo frente a los riesgos de la extraconstitucionalidad reiterada, que podrían transformarse, a la larga, en desencadenante de un gran desorden político y social. Es en definitiva una actitud que tiene demasiado de conservador y medroso; de sentimiento de angustiado, por lo que podría ser el curso de un régimen sin capacidad para flexibilizarse. No es la promesa de una pelea por alcanzar lo que se cree, sino más bien el pánico de que dejando las cosas como están pueda acumularse pólvora para próximos enfrentamientos. Estos temores ya se vieron en el desempeño de la oposición legalista 1992-1995, que justamente no logró ningún éxito en su afán por mantener desligadas sus nociones de democracia e institucionalidad de las necesidades de la gente, no llegó en ningún momento a concitar apoyo social y a construir alguna base de masas para un giro de política.

La legalidad abstracta fue percibida por siempre como una soga lanzada al cuello de los oprimidos. Por eso no pueden resultar atractivas las invitaciones a salvar a los viejos partidos, sus instituciones fallidas y su leyes decadentes. Mucha gente del pueblo, por desgracia, ha demostrado preferir la vía del gobierno fuerte (dictadura sui géneris), que hace punche todos los días, y que ha mostrado tener los medios para cumplir con lo que ofrece, por más limitadas que sean sus realizaciones efectivas. Esto, que a la vista del crítico ilustrado es una vulgar muestra de incultura democrática, con más precisión debiera ser señalado como una manifestación confusa de ruptura con un sistema político envejecido. Desde este punto de vista, resulta un hecho casi circunstancial que este giro en las actitudes y preferencias, beneficie, ahora, el improvisado y tramposo juego del fujimorismo.

La modernización del Estado bajo la batuta de los hombres del actual régimen, puede parecer como una operación "chicha", una victoria de la mediocridad, la astucia y la falta de escrúpulos, sobre una sociedad sin voluntad e ideas. La anomia y disgregación social derivada de la crisis larga y la violencia, engendró al monstruo autoritario y le insufló sus aires de pequeño Napoleón. Pero lo más interesante es que una vez convertido en el personaje central de una trama que muchos juzgaron al inicio como meramente anecdótica, Fujimori ha logrado descubrir que la manera de permanecer es proseguir robando energías al cuerpo social, dividiendo, atomizando y convenciéndolo de que el poder del Estado es lo único real.

Todo lo que en este gobierno salta a primera vista (paramilitares, espías, manipuladores de opinión, medios sumisos, jueces y fiscales prevaricadores, parlamentarios de medianoche y por encargo, ministros descoloridos y atontados, etc.), sirven a su necesidad de existir manteniendo la iniciativa desde los más altos niveles del poder. Es aquí donde se encuentra la razón de por qué la "emergencia" no debe acabar, ni la reforma del Estado puede declararse terminada. Y es en este mismo punto en dónde debe buscarse el talón de Aquiles de este proyecto. La sola articulación de un alternativa creíble y decidida a desafiar al régimen actual, se convertiría en su condena de muerte. Todo está en saber quién se atreve a forjarla y en qué perspectiva.

Capítulo IV
La oposición está desnuda

De cómo apareció la oposición democratica-institucional, para luego resignar sus banderas y dejar a Fujimori sin nadie que lo enfrente.

EL AUTOGOLPE DEL 5 DE ABRIL NO SÓLO HIZO NACER LA SINGULAR dictadura fujimorista que existe hasta la fecha, sino que inauguró una forma de oposición burguesa que proclamaba un programa condensado en la idea de la restauración de la democracia representativa en sus mecanismos tradicionales. Hasta esa fecha el gobierno había gozado de la subestimación que le profesaban los partidos del sistema. Para ellos la elección de 1990 fue apenas un accidente, del que había que sacar provecho encargándole al presidente sorpresa, carente de partido y de futuro político, hacerse cargo del trabajo duro del ajuste y la represión, mientras se definía quién sería su reemplazo el 95. El fracaso de Vargas Llosa había dejado a la burguesía sin cartas de primera línea. El hundimiento de las dos facciones de la izquierda los había sacado de juego. El único resultado expectante, por ironía, era del APRA que tras el desastre gubernamental y con un candidato sin brillos, logró un 20%.

Esta situación fue interpretada como favorable al regreso de Alan García. E impedirlo pasó a ser la ocupación full time de un número muy grande de personas. Hasta un semipartido, encabezado por un personaje de caricatura, fue creado y financiado con generosidad para que cumpliera con terminar de liquidar al expresidente. Que el gobierno aprista fue sumamente corrupto y que su principal figura sobrepasó todo límite de prepotencia, parece estar fuera de duda. Pero, tal como se ha desenvuelto la persecución política antes y después del autogolpe, lo que se ha hecho claro es que había consigna y una bolsa puesta en contra de García.

Los cargos al gobierno aprista tenían, sin embargo, una proyección política que pocos vieron. Cada denuncia que afirmaba que el presidente del país pedía "la suya" a los empresarios que beneficiaba con subsidios, que disponía de cuentas secretas para trasladar los montos de la coima, que compraba canales de televisión con testaferros, que ampliaba su casa de playa con el dinero del fisco,

cayeron como bumerán sobre todo el sistema de representación. Si García había podido hacer estas gracias sin cuidar las mínimas formas, no era acaso lícito imaginar que los demás políticos profesionales podían hacer lo mismo, aprovechando sus propias ubicaciones.

En medio del sonoro juicio a la democracia corrupta, Fujimori quedó como en las nubes. Con él no era la cosa. El ajuste y la reforma neoliberal avanzaban aceleradamente y el presidente reclamaba cada vez más atribuciones extraordinarias para legislar y decidir sobre el destino del país. Y los parlamentarios le dieron las facultades, mientras seguía el interminable juicio al régimen anterior. Más aún, cada vez que algo se le hacía difícil el presidente podía recurrir a los sectores parlamentarios en pugna y sacar ventajas del APRA a cuenta de absoluciones, o de la derecha con cargo a la coalición antialanista. De 1990 al 4 de abril de 1992, funcionó una semidictadura consentida por un Congreso ocupado en otra cosa. Así se labró el autogolpe. Fue naciendo del repudio a un sistema que se reconocía totalmente podrido y de la idea de que un presidente, al que no le llegaban las condenas, era el único que podía rescatar a la nación.

Razón tenían los que fueron presidentes de las cámaras de senadores y diputados, cuando decían que el Congreso no había sido obstruccionista sino colaboracionista, por lo que debía rechazarse esa explicación del autogolpe. Lamentablemente cuando hablaban así no hacían sino admitir el grado de su ingenuidad, al pensar que su pasividad ante Fujimori, su gratuita colaboración, les garantizaba un buen trato con el poder. Nada de eso. Los conspiradores de abril calcularon muy exactamente a quién tenían por enemigo. Por eso movieron sus piezas implacablemente, sirviéndose del pleito entre los partidos para derrotarlos a todos juntos.

La disolución del Congreso y la jubilación de la clase política, llegó de su propio peso. Fue como si por dos años los partidos parlamentarios hubiesen querido probar su inutilidad absoluta, tan creídos estaban de que vivían un breve recodo en la historia, y que les tocaba simplemente esperar que se reiniciara su turno político. En el Perú, la larga crisis había destruido las confianzas y certezas. ¡Qué fácil iba a ser, entonces, señalar un culpable único y absoluto de todos los males: la "partidocracia", plagada de políticos corruptos y de costosos e inútiles parlamentarios!. Ese era el verdadero problema, que Fujimori resolvería con el apoyo de los tanques de Hermoza

Ríos y los espías de Montesinos, para aplauso de las tribunas, brutalmente empobrecidas por la crisis, y el beneplácito de los grandes burgueses, seguros que ahora habría un mejor escenario para los más ricos negocios.

El 5 de abril se vio a los ojos del mundo, que el desamparo en que se imaginaba la presidencia de Fujimori, era sólo apariencia. Todo el poder real, militar y económico, se había concentrado a sus espaldas. Los congresistas desbancados no encontraron eco en ningún segmento de la sociedad. Para que algunos militares hicieran notar que ellos tampoco acompañaban el autogolpe, dejaron correr siete meses y se tomaron los mayores cuidados en buscar una forma de hacer entender que su proyecto era ajeno a los partidos. La asonada del 13 de noviembre, de Salinas Sedó y sus amigos, acabó ciertamente cuando todavía no había comenzado. No había aún terreno sembrado dentro de las fuerzas armadas para contradecir abiertamente al presidente y su comandante general. Uno que otro empresario, totalmente aislado como Vega Llona, tuvieron el valor de rechazar el acto de fuerza, para disgusto e incomodidad de sus colegas. Pero también ellos fueron voces no organizadas que se corrían de toda proximidad con los partidos tradicionales.

En el plano internacional ciertamente la protesta tomó una expresión más sonora. Se condenó la determinación arbitraria pero se resistió la adopción de cualquier iniciativa concreta para crear un cerco y aislamiento real, que forzase una eventual reversión de los hechos. Desde el punto de vista de la Casa Blanca, las otras potencias y los demás gobiernos latinoamericanos, lo que contaba era no dar un aval explícito al procedimiento de fuerza que pudiera considerarse un modelo para otros países, pero de igual modo no presionar tan fuerte que se pusiese en riesgo la perspectiva de estabilización que Fujimori ofrecía para un lugar como el Perú definido de alto riesgo para los intereses imperiales.

La protesta internacional tomó un cariz de encauzamiento a la descarriada oveja autoritaria peruana. Pero esta pretensión en quién ya había ganado un amplísimo poder en una sola noche, resultaba casi inocua. El presidente autogolpista podía darse el lujo de hacer gestos condescendientes hacia afuera, mientras más duro era su rostro hacia adentro. El 5 de abril se habían cambiado los papeles; el personaje al que se le veía como un participante sin tarjeta en la fi-

esta del poder, había pasado en un solo acto al lugar de salvador providencial de la crisis general de la república. Y era evidente que , a partir de entonces, no iba a ser nada fácil desplazarlo de ese sitio.

Lo demás fueron los efectos del golpe de mano. El régimen autogolpista buscó demostrar fuerza, allí donde sólo había debilidad y resignación a la falta de soluciones. Cargó de imágenes allí donde faltaba mucho para haber realidades. Se proclamó el orden después de haber instaurado el desorden institucional. Se declaró la moralización sobre todo el mundo que hubiese tenido cargo público en el pasado, menos sobre los que lo ejercen actualmente, haciendo nacer una moralidad del ocultamiento y de la falsía de las informaciones. Se anunció la nueva democracia, que sería aquella que se entablaría como relación directa entre el presidente y el pueblo, pero lo que estaba inagurándose era una maquinaria de reproducción del poder y de tosco manipuleo de las necesidades elementales de la gente.

Esta situación que puede rebelar a cualquier espíritu crítico, ha sido empleada certeramente para imponer el monopolio de la política fujimorista, y ha hecho que los partidos ya derrotados tiemblen en enfrentar las trampas del poder por el temor a acentuar su aislamiento. Zanjado el destino de las organizaciones políticas tradicionales, incluida la izquierda, estaban dadas por fin las condiciones para la entrada en escena del *fujimorismo orgánico*, aquel tipo de estructura política que debía acompañar y proporcionar el personal político para la reforma del Estado. Y, como era de esperarse, la nueva democracia a lo Fujimori, tenía que terminar por expresarse como ella era misma, es decir como una junta de aventureros y renegados de la política; tecnócratas y burócratas de la antipolítica; empresarios, abogados e ingenieros metidos a los asuntos del Estado. Cambio 90 y Nueva Mayoría, han servido para poner en primer plano a una segundilla que ha encontrado en Fujimori la ocasión para iniciar una carrera política para la que antes no tenían ningún espacio, y que ahora se desenvuelve reemplazando a los hombres y mujeres de partido que por años se prepararon casi exclusivamente para el ejercicio del poder.

A partir de 1992, y por tres años, las casas políticas arrojadas del presupuesto público levantaron la bandera de la democracia ofendida. Pero no hicieron mucho más que eso. En vez de agitar sus propuestas, las guardaron discretamente, argumentando que más importante era

contribuir a que concluyera el proceso de estabilización económica y pacificación contrasubversiva. La posibilidad de una intervención de las masas en la coyuntura no contaba en sus planes; probablemente les hubiese sido menos deseable una etapa de conflicto abierto, con connotación social, que aguantar la dictadura, empujando lentamente a su redemocratización. Por ello mismo la gran batalla por la recuperación de la democracia se terminó trasladando fuera de las fronteras, allí donde las olas de los protestantes podían causar el menor estropicio, y donde las soluciones quedarían suficientemente bajo control para que el sistema quedara enterito después de la movida.

Vehementes comisiones tocaron las puertas de la OEA y el departamento de Estado, para pedirles interceder en el pleito de poderes en el Perú. Notorios jefes de la izquierda se encontraron en la incómoda posición de estar pidiéndole al imperialismo que tome parte en un asunto netamente interno, y para darle algún sentido a su nueva postura arguyeron que el coloso del norte, después de todo, era titular de valores permanentes: democracia, derechos humanos, que lo conducían a actuar como un regulador internacional. Se borraba, de esta forma, toda posibilidad de entender el reiterado apoyo de Washington a las más brutales dictaduras, allí donde lo que estaba en juego eran sus intereses económicos y estratégicos.

El rol de la OEA y los EE.UU., respecto al autogolpe fue, por lo demás, un desmentido flagrante al supuesto de su consecuencia democrática. La delegación conformada por Gross Spiel y Baena Suárez, desde sus pergaminos de presentación marcados por la colaboración prestada a oscuros regímenes autoritarios en sus respectivos países, era un arma a favor de la dictadura. Pero la oposición democrático institucional quizo verla, en cambio, como una conquista de sus esfuerzos. Por ello declinaron tan suavemente los que eran sus tópicos centrales: sustitución de Fujimori por el vicepresidente Máximo San Román, ya proclamado "presidente constitucional", y devolución de los mandatos parlamentarios; y aceptaron pasar a negociar inmediatamente una "salida intermedia", con el auspicio de los delegados internacionales.

Después de un breve tira y afloja y mucha persuasión de los delegados internacionales la salida estaba lograda, todos quedaban renunciados, menos uno: Fujimori que seguía en su puesto, sostenido

por los militares. Gracias a la intermediación OEA los destituidos aceptaron transformarse en renunciantes, y el golpista nocturno pasó a convertirse en cabeza de una supuesta transición. Gracias a la OEA y la oposición timorata, el justo reclamo de una Asamblea Constituyente, como posibilidad de un nuevo poder democrático en el país ante el que se entregarían todos los cargos, se convirtió en su caricatura a través del CCD, es decir un parlamento concedido y sometido por la dictadura.

La "presión internacional", propiciada por la oposición democrática, engendró un tipo de transición política que era un triunfo completo del autogolpista. Los partidos se habían colocado la soga al cuello con el alegre concurso de la OEA. Convocadas las elecciones al CCD, era claro que ellas confirmarían la mayoría social fujimorista y legalizarían el 5 de abril. Esto lo entendieron aún las alas más conciliadoras de la oposición. Pero una cosa era saber que era el CCD y otra resolver lo que había que hacer frente a él.

La táctica se convirtió así en el eje de nuevas diferencias. Un boicot al engendro podía haber cabido, siempre y cuando, se hubiese optado por el camino de una fuerte denuncia del arreglo dictadura-OEA y de un rechazo a la pretensión de la dictadura legalizada. Esto hubiera supuesto, además, invertir esfuerzos en tratar de producir una movilización de masas extraparlamentaria. Pero también podía haber sido válida una intervención para golpear desde adentro. Es decir, en una correlación desventajosa, era plausible formar una minoría parlamentaria activa que usara la tribuna para convocar a la unidad democrática del pueblo.

La oposición institucionalista se dividió en torno al tema de la participación en el CCD, pero en perspectivas totalmente opuestas a las señaladas. Los abstencionistas se cruzaron de brazos, como si estuvieran esperando que la comparación con el penoso parlamento fujimorista, fuese a levantar los bonos de los antiguos senadores y diputados en receso, y haría que finalmente fueran vueltos a llamar para volver a ocupar el lugar del que nunca debieron ser excluídos. Los que se adscribieron al CCD, lo hicieron, por su parte, dentro de las reglas establecidas por la dictadura. Se preocuparon en moderar los excesos de la carta constitucional, otorgándole cierta seriedad y coherencia que no merecía, y en contribuir a bajar las disputas para llegar con la mayor tranquilidad posible a las elecciones de 1995.

Ninguno de los dos sectores de la oposición ofrecía una perspectiva real. No debe extrañar pues que muchas personas entendieran que la esencia del programa de la restauración democrática se encontraba en darle un salvavidas al naufragio de los partidos, y no tenía nada que ver con una política de masas. A fines del 93, durante la coyuntura del referéndum, cuyo dramático final no fue anticipado por nadie, la oposición reafirmó su miopía al leer lo ocurrido como un "empate técnico", después del cual Fujimori debería haberse enmendado y convocado al diálogo de sectores. No hubo, por cierto nada de eso, sino que más bien se acrecentó la beligerancia, mientras multiplicaba el programa de pequeñas obras sociales entre la población empobrecida. Entretanto, el fermento de descontento evidenciado en las urnas se diluía sin conducción política.

A mediados de 1994, algunos núcleos de la oposición declararon alborozados tener resuelto el problema de la sucesión de Fujimori. Habían logrado captar el interés del embajador Pérez de Cuéllar para entrar en la disputa y hacerse abanderado de la redemocratización. Pensaron que el "prestigio internacional" del personaje les ahorraba toda presentación pública, que el país se inclinaría ante tamaño lujo, y que los partidos no tendrían otra chance que alinearse. Ya se sabe lo que ocurrió. El ex-secretario de la ONU fue desdibujándose en medio de sus contradicciones políticas y bajo presión de la maquinaria fujimorista. Quiso presentarse como el portavoz de una política equivalente a la que se había llevado adelante los cinco años anteriores, y hasta recordó su papel de propiciador inicial de los encuentros de Fujimori con el F.M.I., pero esto que creía sería tranquilizador, convertía en superflua su propia postulación. A nadie podía interesarle un opositor dispuesto a hacer lo que ya hacía el gobierno. Para más neoliberalismo bastaba y sobraba con el régimen de los cinco años.

Pérez de Cuéllar, pretendía además ser la encarnación de las buenas formas democráticas atropelladas cada día Pero el tiempo lo llevaría a descubrir que en medio de las urgencias inmediatas y la desesperanza de los sectores más empobrecidos, esto sonaba apenas a una extemporánea reedición del viejo y desacreditado estilo de aristocracia política, que ya había probado su inoperancia. En la disputa entre el pragmático e inescrupuloso, con el legalista y medroso, salían ganando las duras maneras del nisei. Se puede entender el horror que en gentes cultivadas provoca este crudeza del votante

peruano. Pero no se puede aceptar que hayan creído que los peruanos podrían dejarse ganar por el relumbrón del "ciudadano del mundo" que no estaba dispuesto a jugárselas por alguna alternativa concreta que lo comunicara con el pueblo.

La UPP, por lo demás, no surgió unificadora de la oposición fragmentada, sino convertida en un grupo más que peleaba por aumentar su cuota particular de representantes. Los partidos con toda razón la vieron competitiva, apreciaron con desconfianza la legión de logreros que rodeaban al embajador, y por ello eligieron marchar con listas propias a la primera vuelta. Muchos se consolaron imaginando que la necesaria convergencia se produciría recién en el siguiente round electoral. Pero esto nunca hubo. Fujimori ganó tan ampliamente que no dió oportunidad para la revancha. El 9 de abril la democracia institucional, en todas sus variantes, estaba enterrada por segunda vez en un lapso de tres años, sin embargo ahora estaba bajo la lápida de un voto masivo que exaltaba al dictador y que ocultaba la persistente presencia de los tanques. La oposición había perdido una nueva batalla. De aquí en adelante sus posibilidades de recuperación serían cada vez más reducidas en un escenario siempre más complejo.

Entre 1992 y 1995, los partidos de la democracia burguesa sufrieron sucesivos escisiones y deslindes, teniendo como eje la actitud ante el régimen de Fujimori. Desde que Rafael Rey y el núcleo de Renovación, se apartaron de lo que quedaba de la Libertad de Vargas Llosa, acelerando la muerte del novel partido de las derechas neoliberales; y después que el ulloísmo agrupado en el diario *Expreso*, dejó atrás sus lealtades con Acción Popular y Belaúnde, la ruta estaba trazada. Individualmente o en grupo, se han sumado los políticos de diferentes canteras que han ido a enganchar al vagón trasero del fujimorato, como intérpretes del sentimiento burgués que reclamaba entenderse con el gobierno perdonándole sus fallas de forma y procedimiento.

Durante el autogolpe aparecieron los "demócratas" que encontraban justificativos para la violación constitucional, entre ellos Belmont y Andrade. En el referéndum salieron los propagandistas del voto por el si para alcanzar la estabilización en los plazos más cortos, como argumentaba Chirinos Soto. El 9 de abril, se vio actuar a los reeleccionistas abiertos y a otros más discretos como los del

PPC y del FIM de Olivera. La oposición democratizante se fue desgranando hasta llegar a la orilla de su penosa derrota. Aún los que lograron arribar al 9 de abril planteando que Fujimori debía dejar de ser presidente, no pudieron lograr expresar diferencias de fondo que los justificasen como verdaderas alternativas al reeleccionista.

La dispersión en muchas listas, no implicaba la existencia de muchas ideas. A lo sumo las mayores audacias consistían en ofrecer que de llegar al gobierno "llevarían adelante un programa social para combatir la pobreza", pero tales declaraciones se dieron justamente cuando el presidente-candidato ya había entrado en plena campaña de inauguración diaria de obras en pueblos jóvenes y distritos rurales, aclamado como el primer mandatario que se acordaba de los más pobres y postergados. Otros se dieron por la vena chovinista y agitaron la bandera de Tiwinsa, remarcando el hecho que Fujimori nunca llegó a recuperar este territorio de manos de los ecuatorianos. Creían que la población, herida en el honor patrio, se desplazaría al campo opositor. La opinión mayoritaria, sin embargo, se mostraba mucho más favorable al hecho que se hubiera logrado una paz rápida, antes que a un conflicto largo y sangriento con el vecino.

Al final, estas y otras argumentaciones, fueron apreciadas como planteos dispersos y coyunturales, es decir como pruebas concretas de que ninguno de los opositores, desde la UPP hasta la IU, tenían una visión global de lo que había que hacer con el Perú los próximos años. Después de la reelección, en primera vuelta y con una aplastante diferencia de votos, los partidos no podían alcanzar otra conclusión que la de afirmar la inviabilidad de la apuesta por la normmalización democrática dentro de los cánones de un sistema representativo standard y por la construcción de instituciones que equilibren y despersonalicen el poder.

A ninguno le quedaba ganas de seguir insistiendo en el asunto, cuando menos en el corto plazo, si se trataba que a lo sumo tal posición podría lograr vigencia recién en el lejano año 2000. En este punto se planteaban, incluso, problemas de techo de edad para los principales dirigentes de la clase política. Pérez de Cuéllar declaró de inmediato que no volvería a ser candidato; Belaúnde y Bedoya se jubilaron anticipadamente en 1990; a la generación heroica del APRA ya no le queda ni mucho heroísmo ni tantos sobrevivientes que puedan hacer algo.

Tras el fracaso, la situación nacional había concluido una vuelta en redondo y regresado al punto de partida. La disyuntiva entre restauración y colaboración, se resolvía por el momento a favor de los voceros del acercamiento. Nuevas crisis estaban prometidas en las agendas partidarias, sobre todo después que se supo que el gobierno les subía el mínimo de adhesiones necesarias para reinscribirse y les recortaba el tiempo para conseguirlas, con lo que en la práctica los condenaba a la ilegalidad y la inoperancia.

En cada caso los partidos han vivido su peculiar crisis. El PPC, por ejemplo, brinda todas las evidencias de estar camino de su liquidación. En las elecciones del 9 de abril retiraron su fórmula presidencial y callaron su actitud en la disputa entre reelección y oposición. Para las municipales, no les quedó otra que dejar en libertad a sus militantes más destacados para que tentaran suerte en las listas oficialistas y en las no oficiales progobiernistas. Definitivamente cercados por una presión empresarial que les exige ser realistas para que la política de apertura siga adelante, los abogados exbedoyistas se van desgranando como los cabellitos maire que se lleva el aire.

En la UPP, por su parte, no faltan banqueros, empresarios, militares en retiro, que quisieran arriar sus pálidas banderas opositoras y sumarse a la caravana de apoyadores del régimen. Los contienen los miembros del ala izquierda (ex-MDI) de la variopinta alianza perezcuellarista, que cada tanto intentan hacer recordar que la razón de ser de su movimiento era actuar de tibio contrapeso democrático.

Durante la votación en torno al mensaje del primer ministro, se apreció la desorientación upepista: su ala de derecha, rompiendo un acuerdo previo, decidió votar a favor del gobierno diciendo que las intenciones eran buenas, mientras que la "izquierda" se abstuvo, porque supuestamente había todavía que esperar para ver si el gobierno cumplía lo mejor de sus promesas. El sabor que dejó esta discrepancia era, sin embargo, que en momentos de definiciones una parte de la UPP avanzaría cada vez más a la derecha, mientras la otra se quedaría al justo medio con la esperanza de que de esta manera impiden a sus correligionarios irse tan rápidamente como parece que quisieran..

En el APRA, la crisis ha sido fulminante. La operación liquidar a García ha destruido la moral de una buena parte del viejo partido, ha dispersado militantes y simpatizantes, y ha generado una interminable

polémica en torno a lo que se debe hacer con el expresidente. No parece haber duda que, con maniobras o sin ellas, el ala mayoritaria es la que responde a la maquinaria y que es leal al exilado. Los congresos y las diversas justas electorales han confirmado el peso indiscutible de este sector. Del Castillo y Mantilla se han jactado abiertamente de los alcaldes que han logrado colocar a partir de listas formalmente independientes. Sin embargo, a la hora de definir, este mismo núcleo ha preferido buscar alguna transacción con sectores intermedios, probablemente para crear la idea del desprendimiento en aras de la unidad del partido, pero también para evidenciar que su fuerza va de la mano con su espíritu negociador. Con un alanismo poderoso, pero en segunda línea, la crisis se sigue ahondando y los desenlaces quedan para más adelante. Todo lo cual encaja exactamente en las pretensiones del gobierno, que son las de golpear al APRA, sin dejar que las cosas lleguen a su completo colapso.

Los centros partidarios supuestamente equilibradores, formados en base a personalidades destacadas: Mercedes Cabanillas o Germán Parra, han mostrado, sin embargo, una vigencia efímera y una incapacidad radical para abrir nuevas perspectivas. Falta saber si esto se repetirá con Alva Castro, ahora elevado a la secretaría general, que ha arrancado sus funciones acentuando las declaraciones opositoras que ya casi no se oían. Entretanto los antialanistas que hacen muchas olas con sus denuncias, parecen estar destinados a empujar estados de ánimo y corrientes críticas sin mucho porvenir. Son fuertes en los medios de comunicación de la derecha, pero son frágiles en los organismos de conducción. El APRA nunca muere, decían sus fanáticos. No muere pero ya casi vegeta, sin presencia real en la vida nacional, convertido en una estructura de dimensiones regionales, concentrada en algunas ciudades del norte, y uno que otro punto del territorio, ausente en el resto del país.

Acción Popular, dos veces gobierno, no tendrá el mar de fondo aprista ni sufrirá los dilemas pepecistas, pero tampoco muestra tener claro hacia donde se dirige. Los procesos electorales para la presidencia y las municipales, lo mostraron como el partido que seha negado tercamente a admitir su crisis, lo que le llevó a hacer sus campañas repitiendo los cánones de sus horas victoriosas. Hecho el balance A.P. ha quedado por debajo del APRA, reducido a algunas plazas municipales fuertes: Chiclayo, Huancayo, selva norte; que en gran medida dependen de los caudillos locales.

57348

Alguna vez, Andrés Towsend dijo que el belaundismo no era sino una asociación de independientes sin doctrina y programa, orientada por el inspirado olfato de su máximo jefe. Hoy se podría decir que la mayoría de los independientes se han ido, y que los alcaldes provincianos podrían también irse si es que eso es lo que conviene a sus intereses particulares. La falta de doctrina y programa se ha hecho insalvable, cuando se carece de la más elemental posición frente a la liberalización, que aplauden sus viejos amigos de *Expreso*, y acerca de lo que debería hacerse para desmontar la militarización del Estado.

El olfato fino, por lo demás, pareciera haberse enturbiado con los años. Si alguna vez el viejo se negó a admitir que Velasco fue bastante más que una conspiración usurpadora contra de su persona, y mantuvo esa idea durante todo su segundo gobierno, sin entender lo que había cambiado en el país; hoy su terquedad le dice que no hay crisis de los partidos, sólo presidente tramposo que manipula a la gente. El error del primer diagnóstico explica mucho de lo que el belaúndismo no pudo ser en la primera mitad de los 80; el error del segundo se patentiza en esa lucha heroica por reinscribir al partido, para volver a repetir el desastre en unas municipales en las que no tenía destino.

Finalmente, si algo hay que decir de la izquierda electoral es hacer notar su trágico desfondamiento. En 1992, las direcciones de los partidos que alguna vez fueron la IU, ordenaron buscar un frente común con las representaciones tradicionales de la burguesía, con las que compartían la condición de expulsados de sus posiciones parlamentarias y regionales. Según cierta ortodoxia la situación creada por el autogolpe obligaba a un "gran frente antidictatorial"; según algunos más pragmáticos la unidad con la burguesía política era importante para no aislarse, es decir para no perder escena política aún sin parlamento.

Según la lógica de la vida, sin embargo, esta podía ser el tipo de alianza que sirve para confirmar que todos son lo mismo y para hacer que las culpas de unos salpiquen a los otros. La izquierda que ya cargaba de por si con severo desgaste en la campo de la representación pública, con no pocos parlamentarios veletas, alcaldes enfrentados a sus pueblos, diputados regionales arreglados a la componenda con sus enemigos, perdió en 1992 quizás su última oportunidad de construir un espacio nuevo y diferenciado para abrirle una alternativa a las masas. Mientras en las bases de la izquierda se percibía

intuitivamente que la crisis era tan profunda que sólo cabía pensar en un giro dramático hacia adelante, entre muchos dirigentes se vivía la ilusión de estar ante una ruptura temporal que restablecería luego los laureles de la democracia parlamentaria. Las bases querían que se les hablase en un lenguaje nuevo, pero los jefes creyeron que había que buscar un idioma común con los partidos viejos.

Lo que es más trágico, la izquierda se fue detrás del frente antidictatorial, pero este no llegó a cuajar nunca. Innumerables reuniones, desayunos, almuerzos, cenas, de la "clase política", pero en las cuestiones claves: participación en el CCD, elaboración de una campaña común ante el referéndum, lista unitaria para 1995, nunca hubo siquiera una discusión seria entre todos, mucho menos una plataforma de acuerdo. La derecha se escindió ante Fujimori y dejó a los responsables de la izquierda en el más patético desamparo. Los militantes radicalizados protestaban por los devaneos con la OEA, la derecha y el APRA, contrarios a todo lo que se había venido diciendo hasta la noche anterior. Los dirigentes contestaban que esta era la única política realista. Pero lo real es que el frente de la democracia quedó nonato.

A la última hora de las inscripciones electorales de 1995, en medio de una profunda impotencia, los jefes de la izquierda decidieron sacar del baúl de los recuerdos a la maltratada IU. Después de haber dicho que era un "cadáver insepulto", la revivieron para la circunstancia. Pero, como no habían entendido nada de lo que estaba pasando, no se les ocurrió tomar una actitud cuidadosa y trascendente, que contrarrestara en algo la derrota que se veía venir. No se les ocurrió dar algún sentido educativo y reagrupador a su postulación. Por el contrario, la pelea por el lugar de los líderes principales en las listas parlamentarias fue las más fiera de todos los tiempos. Como dando a entender que sabían que les iba a tocar demasiado poco en el reparto y que debían asegurarse como fuera. Cuando alguién conversaba con la gente de izquierda en esos días, se daba cuenta que todos sabían que se trataba de un suicidio. Pero igual siguieron adelante. Empujados pora algún instinto tanático. Así la izquierda logró el merecido 0.57%, que la puso incluso detrás del Frepap de Ataucusi.

Terminada la contienda, empezaron a oirse voces que abrumadas por el resultado señalaban que ya no había lugar para mantener los partidos y que había que dar por canceladas las expresiones

organizadas de izquierda. Hasta hoy, sin embargo, no se conoce un balance político de lo que se hizo y de lo que se pudo hacer. Moviéndose en la nebulosa, los fallidos líderes de la izquierda peruana apuntan explicaciones en todas las direcciones: crisis de paradigmas, caída del Muro de Berlín, cambios en las clases sociales, desaparición del proletariado, crisis de representatividad, etc.

El problema es que el afán de justificarse suele servir únicamente para alimentar la confusión. Sabiendo que han sido muchos hechos los que se conjugan detrás de la bancarrota actual, lo que interesa es poder volver a hablarle al país y al pueblo trabajador, sobre lo que pasó con la promesa de la revolución y el cambio social, sobre las respuestas de fondo a sus problemas y necesidades. Si está vigente la tarea de cambiar el país y el mundo en el que se vive, entonces la izquierda es una apuesta válida, que no puede ser disuelta, al margen de lo que ocurra con algunos de sus antiguos dirigentes.

En las municipales, seguramente como efecto de la derrota anterior, lo que aún subsiste de la izquierda ha permanecido en notable silencio. Varios de sus cuadros han tomado la ruta de la "independencia", construyendo listas locales o regionales, con programas que eludían el choque frontal con el gobierno. Otros, especialmente dentro de los cuadros técnicos, se asociaron con Andrade para poner sus capacidades como una garantía de la buena gestión que se promete. Y no ha faltado un puñado que entendió que lo coherente con sus ambiciones era asociarse directamente al gobierno, apostando a lo que creían ganador seguro.

En las bases, a su vez, se ha manifestado un fenómeno muy marcado de recolocación. La militancia "full chamba", los grupos de campaña, los activistas y organizadores, los miembros de los aparatos de seguridad, han ido tomando puestos allí donde había disposición para recibirlos y remunerar sus servicios políticos. Este penoso proceso de mercenarización dentro de una militancia valiosa y esforzada, se entiende a partir de una profunda crisis de ideales que la movilicen, de línea política para actuar, y de organización que los discipline y responda por sus vidas. La derrota tiene aquí una de sus más crueles marcas.

La oposición post 9 de abril evolucionó rápidamente hacia un desdibujamiento político. Sin tener como insistir en la cuestión de la redemocratización, las posibilidades de hacer algo se redujeron a

seguir el ritmo de las iniciativas del gobierno, a ver si por allí volvían a coger el hilo de los acontecimientos. Esto es lo que pasó con la ley de impunidad, que liberó a los criminales de la Cantuta y absolvió los crímenes de guerra del personal militar. La opinión mayoritaria estuvo entonces claramente en contra del recién reelecto, pero la oposición ya no tenía ni fuerza ni coherencia para traducir el rechazo en un acto plebiscitario contra el mandón. La intervención en las universidades, la ley de tierras, pasaron aún con menos resistencia.

La oposición hace constancia pero de allí no va a ninguna parte. Fuera del Congreso, los partidos no existen. Y como al Congreso no se le puede tomar en serio, mucho menos cuando ha servido para otorgar confianza al gabinete, con sólo tres votos en contra, e insiste en actuar como caja de resonancia del ejecutivo sin que la oposición pueda hacer algo para que las cosas sean diferentes, es posible concluir que para todo fin práctico la oposición institucional ya no tiene presencia práctica. Fujimori está totalmente solo en la cancha. Rasgo típico de todo fenómeno totalitario, el mecanismo del poder no sólo derrota sino avanza a eliminar adversarios organizados, y a asimilar sus elementos más inconsistentes.

La campaña para las elecciones municipales de 1995, ha estado impregnada de un turbio espíritu de mimetización y asimilación que invade la política nacional. Los candidatos, a la postre vencedores en Lima y el Callao, fundaron sus pretensiones en mostrarse como profujimoristas espontáneos, actitud no alterada aún cuando el mandón principal hiciera lo posible para aplastarlos con la maquinaria del poder estatal. Sin proponérselo Andrade y Kuori, han inaugurado la era del *fujimorismo a pesar de Fujimori*. Y ello, por más éxitos electorales que provea, representa una franca degradación del modo de hacer política en el Perú.

Basta ver nomás el saldo de esta elección; la forma escandalosa en la que los elegidos han pretendido soslayar el contenido crítico del voto que los ha llevado a la victoria; la falta de energía para protestar ante los continuos maltratos del poder; la ridícula manera en que el alcalde Andrade insiste en que no pretende ni pretenderá la presidencia, como si tal deseo, que lo desborda por todas partes, fuese un pecado que debiese guardarse en prudente secreto; todo esto para que no vaya a llegar a los oídos y termine por enfurecer a quién se juzga predestinado para ser cabeza del Estado sin plazo ni medida.

Si las elecciones del 9 de abril habían demostrado la ineficacia de la timorata oposición democrático institucionalista, las del 12 de noviembre han hecho entrever las dificultades de Fujimori para manejarse en un escenario de completa fujimorización. Para aquel que ha demostrado extrema habilidad para sacar provecho de escenarios polarizados, es una pesada cruz saber que le rivalizan, sin enfrentarlo. La zalamería de Andrade representa un dolor de cabeza, ya que el hombre no puede ser premiado, ni reconocido. Después de todo lo que hizo fue un desafío al poder, que en el código fujimorista no se perdona. Pero tampoco puede ser castigado, ni proscrito, porque ello equivaldría a una evidente falta de buen gusto, y porque, además, descartaría la posibilidad de cubrir en parte la derrota con el argumento de la cercanía con el ganador.

La operación de convertir a Yoshiyama en superalcalde, nombrándolo ministro de la presidencia y señor de los pueblos jóvenes, con una bolsa récord de 7 mil millones de soles, es mucho más complicada de lo que aparece a primera vista. No es seguro que recupere los votos perdidos en los barrios populares, pero si va a profundizar el desasosiego de otras capas sociales que cuestionan el uso abusivo del poder. Irónicamente la derrota del ahijado ha forzado tener que mostrar antes de tiempo las cartas marcadas de la nueva reelección. Es que sin una perspectiva ganadora, el fujimorismo tiende a dispersarse y está visto que el único que puede aspirar a repetirse una y otra vez, hasta el infinito, es el propio Fujimori.

Casi de inmediato, la oposición institucional empezó a descifrar las municipales como un necesario llamado de atención al monarca, que tendrá el efecto de moderarlo o hacerlo más respetuoso de las otras fuerzas políticas. Fue con este mismo tipo de ilusiones que se recorrió el trecho que va desde el estimulante resultado del referéndum hasta el desastre de las presidenciales. Ahora queda por ver lo que sucederá de aquí a las municipales de 1998, en la antesala de las generales del año 2000.

Un resultado como el que se resume en la derrota de los candidatos oficiales en Lima y el Callao, trae como consecuencia un sacudón en el país entero; deja atrás el esquema de los candidatos independientes que fungen de despistados, que llevó a que muchos todavía insistieran en tener su lista propia creyendo poder ganar al chiripazo; pone en marcha gran cantidad de expectativas, individuales y colectivas. Por

cierto los viejos recipientes partidarios no son aptos para recoger las novedades de la política de estos días. Gérmenes de nueva organización brullen en distintas partes para interpretar lo que está pasando. Toca estar atento a ello que es señal de futuro.

La incógnita central que se formula a los ojos de todos es la de establecer cómo se llega a pasar de la consigna elemental y espontánea de "hay que quitarle un poco de poder al chino", que prevaleció en las elecciones, a construir una voluntad general para quitarle efectivamente todo el poder y mandarlo a casa. Es verdad que de una idea a otra hay un salto gigantesco, y muy escasos militantes y núcleos organizados dispuestos a batirse por ello. En el Perú de los 90, el triste final de la oposición democrática institucional podría resultar, en la última suma, un hecho de cualquier modo positivo, si en su lugar se erigen liderazgos, formas de organización y de actuación política, que cubran las esperanzas de representación de las mayorías de este descreído país.

Capítulo V
Sendero vergonzoso

La organización maoísta no ha sido capaz de sobrevivir a la captura de su jefe máximo. El sector del "acuerdo de paz" ha establecido un compromiso con el gobierno para acabar la guerra; mientras los pocos resistentes buscan evitar su aplastamiento definitivo.

QUINCE AÑOS DE GUERRA SENDERISTA HAN TENIDO EL EFECTO DE UN gigantesco cataclismo en la sociedad peruana. La reforma del Estado y la existencia política de Fujimori no serían lo mismo, sino se hubieran visto rodeadas del contexto de una violencia que llegó, por un momento, a amenazar el centro del poder burgués. Sin la guerra interna no cabía el 5 de abril de 1992, ni el rol preponderante que hoy se asignan las fuerzas armadas y sus eternizados comandantes generales. El autogolpe fue, ante todo, un operativo de alta estrategia militar, desde el cual se construyó la correlación necesaria para los éxitos económicos, políticos, policiales del régimen.

Abimael Guzmán tiene razón, cuando hace ver en sus cartas desde la prisión, que su obra de guerra ha sido decisiva para que el país sufra profundos cambios. La cuestión es que el filósofo de la "cuarta espada" entiende, en su singular dialéctica, que su derrota es, de todas maneras, su victoria, porque ha llevado a tumbar el Estado seudodemocrático, por ellos repudiado tantas veces. Si en su reemplazo hay una dictadura, apenas encubierta, eso es lo de menos para el caudillo de la insurgencia armada más sanguinaria que se recuerde.

La base ideológica del "acuerdo de paz" se encuentra en esta interpretación forzadamente optimista, es decir acomodada a los intereses de un Guzmán cero autocrítica, frente al desenlace de los 90. Preocupado, por sobre todo, en salvar la idea, la justificación abstracta de la rebelión cuyo día y hora de inicio programó fríamente, Abimael no se interesa para nada en las otras dimensiones que implica el balance: ¿la enorme cuota de sangre demandada por el conflicto, puede ser, siquiera mínimamente, compensada con haber impulsado el giro fujimorista de la situación política?, ¿qué tiene que ver ello con una perspectiva revolucionaria?; ¿cuál ha sido la contribución de la guerra de Sendero Luminoso al actual reflujo del movimiento popular, al recorte de espacios para la lucha de masas y al descabezamiento de sus direcciones?, ¿cuál es el efecto sobre la

conciencia del pueblo peruano de los acuerdos entre la jefatura senderista y el gobierno, que sólo toman en cuenta los intereses más inmediatos de uno y otro, e ignoran los problemas y demandas sociales? .

Las tesis de la "nueva definición" del presidente "Gonzalo", que exaltan los dirigentes y militantes prisioneros, consiste resumidamente en señalar que la guerra podía haber sido ganada si el gran jefe no hubiese sido puesto en prisión, pero que la misma ya no tiene destino en tanto la conducción clarividente ya no existe, o ya no puede ejercer el mando real.

En la rebelión senderista un solo individuo sabía adonde llevar el haz de acciones de guerrilla, sabotaje, atentados y asesinatos selectivos, que desquiciaban el sistema. En manos de sus seguidores estas mismas acciones han sido declaradas aventureras y no se les otorga ningún destino. No importa si la resistencia de "Feliciano" fue dictada, a gritos, por el desafiante prisionero 1509 desde su jaula durante la exhibición en la prefectura de Lima, en setiembre del 92.

El lanzamiento del "acuerdo de paz" nada tiene que ver con si era o no posible realizar todavía operativos que implicasen daños significativos sobre el Estado reaccionario. De hecho la fracción "Feliciano" ha llegado a producir en tres años, algunos golpes audaces como el ataque a la Prefectura de Lima, a la Comandancia General de la FAP, a la Embajada de EE.UU., al hotel María Angola, emboscadas en el Huallaga, Huancavelica, Ayacucho, la sierra de Piura, la cárcel de Quencoro en Cusco, etc.. Pero a pesar de su contundencia, ninguna de estas acciones ha logrado detener el proceso declinante de la lucha armada.

Desde su encierro en la base naval del Callao, con la información que está a su alcance, filtrada y procesada por sus carceleros, Guzmán se ha considerado en posición de decretar por su cuenta, a mediados de 1993, que la lucha de "Feliciano" no tiene posibilidad de victoria. La división de Sendero entre acuerdistas y militaristas, ha sido propiciada y conducida por el propio "Gonzalo", y ha contado con el obvio sostén del gobierno y su Servicio de Inteligencia, convencidos que son los que más ganan de este final penoso de la organización maoísta. La perspicacia de Abimael se aprecia en no haberse equivocado al intuir que su vencedor todavía tenía razones para entenderse con el jefe vencido.

En 1986 y 1992, los senderistas prisioneros se negaron a capitular a pesar del abrumador cerco represivo que se tendió sobre ellos y pagaron con su vida la disciplina a la línea del partido. Con la consigna la "rebelión se justifica" varios miles de hombres y mujeres se convirtieron en máquinas de matar y morir durante más de una década. Guzmán jamás fue capaz de hacer lo que reclamó a otros. Su cobardía, tan grande como su amor propio, le dictó que debía organizar su rendición a cambio de alguna transacción con sus captores.

Pero como el hombre no podía arriar banderas ante un simple "tigre de papel", un "chumbeque" de la reacción, sus caracterizaciones tuvieron que sufrir una rápida revisión, haciendo que Fujimori quedase ahora convertido en la "otra montaña", el "poder que trata con el otro poder", el autor del "Estado nuevo", con el que si cabía discutir una paz, que además era anunciada como un reclamo del pueblo.

Es fácil suponer lo que hubiera sido de Osmán Morote, Antonio Martínez, o cualquier otro líder, encerrado tras las rejas, si hubiese sugerido algún acuerdo con el gobierno y alguna perspectiva de paz. Pero el tipo de organización que es Sendero Luminoso, permite que su mando supremo pueda dar los volteretazos que no se autoriza al resto. La tragedia de "Feliciano" se traduce, por lo mismo, en la imposibilidad de romper y denunciar a su jefatura.

Guzmán Reynoso ideó una guerra que no tenía aliados y que despreciaba cualquier propuesta de compromiso o negociación, como una muestra de la más repudiable debilidad. Que provocaba al Estado a hacerse más duro y a liquidar todo espacio democrático, que en el fondo no eran otra cosa que meros engaños para aturdir a las masas. Al militante no le estaba permitido proponerse una lucha por derechos humanos, ni siquiera los suyos propios; por el respeto elemental a las leyes de la guerra, que su organización tampoco cautelaba; por amnistía o derechos para los presos, porque todo ello, se decía, resultaba desarmante para la acción armada. La conquista final de todo derecho, hasta de los más simples, dependía de la instauración del poder revolucionario.

En pocas palabras se trataba de un delirio sectario que se sustentaba en una voluntad de hierro. Hoy, sin embargo, Guzmán realiza tratativas que apuntan a lograr ventajas sobre su condición de prisionero Publica citas de Lenin que demuestran que cualquier político hace compromisos. Invoca la correlación de fuerzas que es

desfavorable en el Perú y el mundo. Pero no apoya sus reclamos en ninguna campaña democrática que pueda llevar a confrontar con el régimen existente, sino en meras conversaciones privadas y en un oscuro toma y daca con Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, el agente 002.

Cuando la primera carta por el "acuerdo de paz" fue leída por el presidente ante la Asamblea de las Naciones Unidas, las interpretaciones fueron de lo más diversas: "Se quebró", tituló la revista *Caretas*, entendiendo que las condiciones carcelarias habían sido superiores a la moral del hombre; otros alabaron la habilidad de la inteligencia gubernamental como si hubiese podido engañar al prisionero; no faltaron los que supusieron que Guzmán había querido usar la oportunidad para dirigirse a sus seguidores y que había un mensaje en clave detrás de cada línea; los senderistas fuera de la prisión pretendieron que se trataba de una farsa, en la que cabía incluso el uso de un imitador en reemplazo del gran jefe.

Hubo que darle al tiempo para comprobar que se trataba de una propuesta realmente en serio. Esperar las siguientes cartas, las fotos, las entrevistas desde el encierro. Pero sobre todo visualizar los efectos concretos del acuerdo que empiezan a ser evidentes. Varios senderistas de significación intermedia del ala de Guzmán han salido de prisión desde la primera carta, con seguridad como globos de ensayo para verificar reacciones de la opinión pública y las conductas que estos personajes tendrán una vez en la calle. Todo indica que si esto funciona saldrán otros.

El gobierno ha cumplido con llevar ante el jefe supremo cada senderista importante que ha sido capturado, con un resultado casi matemático. En cada caso los jefes caídos han emitido, luego de la sesión rectificadora, declaraciones públicas de arrepentimiento por haber seguido la repudiada línea liquidacionista de "Feliciano" y no haber sabido captar a tiempo las sabias enseñanzas del presidente "Gonzalo". Más allá del poder de convencimiento de Guzmán sobre sus huestes, en el que nadie duda, ¿qué ofrece este individuo preso y aislado para que hayan personas que se crean en el deber de tomar la palabra para excomulgarse asimismos y enfrentar a sus commpañeros?. Nadie impide que los senderistas encarcelados hablen de reunir su congreso y reconstruir su partido: ¿están locos, o es que el "acuerdo de paz" considera esta perspectiva?.

En las universidades bajo intervención del gobierno, prosenderistas notorios han entrado a colaborar con los reorganizadores y ocupan decanatos y direcciones importantes, y su explicación se remite a la necesidad de producir un "ajuste estratégico". Por todos lados se observa un reacomodo político hacia una cercanía con Fujimori. No es una afirmación caprichosa. Es la lógica implacable del análisis hecho sobre los resultados de la guerra y de la opción que ha decidido jugar Guzmán, cuando parecía haber acabado su tiempo político.

El gobierno ya se ha beneficiado ampliamente del logro que le significa haber podido domesticar a un movimiento político con merecida fama de sectario e implacable. Del "acuerdo de paz" ha seguido una aceleración de la ofensiva contrainsurgente sobre los últimos rebeldes de "Feliciano", donde la moral del represor está signada por la certeza de tener todas la ventajas de su lado y la del insurgente lo es por la de saberse traicionados.

Tachados como desleales al mando supremo, los resistentes están expuestos no sólo a la persecución de la represión, sino a la denuncia de sus excompañeros. La ganancia política y militar del gobierno resulta inobjetable. Más aún, para que todos los alcances del "acuerdo de paz" puedan funcionar, es decir para que maduren condiciones que hagan posible la progresiva liberación de los cabecillas y su reinserción política, se requiere tiempo. Una nueva apuesta a otra "guerra prolongada" se está dibujando en el horizonte. Y con ello, por cierto, los guzmanistas se convierten en gente particularmente interesada en que se repita la reelección, para que quién es su interlocutor siga al frente de ellos y los pactos secretos puedan ser cumplidos. Hay que esforzarse en sacar las más justas conclusiones de todo ello.

El tiempo de la guerra está llegando a su término sin que ninguno de los grandes problemas nacionales que existían antes de 1980 haya sido realmente superado. Si sólo de hacer este balance se tratara, Abimael Guzmán y sus seguidores, así como la guerrilla del MRTA de Víctor Polay y Nertor Cerpa, habrían fracasado de plano. Pero mucho más grave a largo plazo, es haber producido una asociación de las causas revolucionarias a una violencia indiscriminada y antipopular, que se ha convertido en baldón brutal para todas las izquierdas, que a pesar de sus esfuerzos de deslinde, no pueden borrar las terribles heridas inferidas durante quince años.

Finalmente, la capitulación revestida de "acuerdo de paz" y el embellecimiento del fujimorismo para pactar con él, están llamados a contribuir, con su propia cuota, a la tendencia de degradación que sufre la política nacional. Después de todo, la comparación entre lo que Sendero Luminoso pidió para la guerra y lo que su máximo jerarca es capaz de entregar para conseguir una paz de acuerdo a sus conveniencias, ha ido llevando al senderismo desde ser el partido armado al que todos temían, a convertirse en un partido prisionero que rendido y colaboracionista con su enemigo, ganándose un baldón histórico tan imborrable como merecido.

Capítulo VI
Representación falseada

Ha sido resquebrajada la unidad del movimiento popular para la defensa de sus intereses comunes. El fujimorismo ha falsificado la representación de los sectores no organizados, pero no está en condiciones de dar salida a las nuevas expectativas sociales.

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA HISTORIA DE LA LUCHA SOCIAL EN el Perú, el fujimorismo significa un punto de quiebre en la alianza entre los sectores organizados de los trabajadores y la gran masa sin organización. Había costado cuatro décadas construir el movimiento popular moderno. Destacar núcleos de vanguardia. Generar estructuras. Definir banderas de lucha. Los procesos históricos que arrancan en los años 50: la relativa industrialización y el aumento de la inversión extranjera, las migraciones y la urbanización, la crisis de la agricultura tradicional y la multiplicación de las tomas de tierras, la radicalización de la juventud universitaria, el reconocimiento de derechos sociales e individuales, la derechización del APRA y el surgimiento de nuevos partidos de izquierda, crearon un escenario proclive a los cambios, al discurso del progreso, a las ilusiones de mejora en la gente.

Una nueva clase obrera, nacida de la modificación de las condiciones económicas y demográficas ingresó a la historia. En un inicio como un mero dato sociológico, sometida a los rigores del trabajo industrial, haciendo honor a su posición de recién llegada. En los 50, el proletariado era la expresión de una juventud migrante, cuya mayor preocupación era tener un trabajo y un lugar para vivir. Más adelante, sin embargo, en los 60 e inicios de los 70, los obreros iban a ingresar, cada vez con más fuerza, al sindicalismo y a los movimientos de protesta.

Ya no bastaba haber podido obtener un empleo; se pugnaba por un mejor ingreso y por ampliación de derechos. El ascenso obrero dejó atrás la influencia sindical del APRA, educada en el colaboracionismo, y fundó la tradición clasista. Al final del gobierno militar, cuando el país se convulsionó rechazando el ajuste y la represión, el nervio de los paros y las movilizaciones, lo pasaron a conformar, sin duda alguna, las concentraciones proletarias. En Lima, los estados mayores estaban en los barrios industriales, en Chimbote alrededor de la siderúrgica, en la región central y el sur, en torno a los centros mineros.

Puede decirse que toda la fase de alza de la economía peruana 1950-1973, es la de un constante incremento de la presencia proletaria; que el momento de crisis: 1973-1988, es el de una resistencia dura y persistente de los trabajadores organizados; y que la fase de estabilización económica se convierte en una derrota fundamental de la clase obrera, producida por la disgregación y el desempleo forzoso. La recesión inducida desde el Estado, puede verse así como un revelador del profundo temor que el sistema siente frente a sus propios asalariados. El interés, que seobserva, por mantener los niveles de actividad económica deliberadamente bajos, implica que se hace uso consciente del arma neoliberal para desestructurar al movimiento obrero. Es la contrarrevolución económica en pleno ejercicio.

La clase obrera de los años 90 lleva rasgos que la singularizan de sus predecesoras. Virtualmente han desaparecido los últimos exponentes de aquella vanguardia clasista que protagonizó las huelgas y los paros generales. Asimismo es cada vez más díficil encontrar al trabajador antiguo, dueño de su puesto, que era el único que podía enseñar este o el otro oficio. La movilidad de la fuerza laboral se ha tornado brutalmente acelerada. En las empresas predominan los eventuales sobre los trabajadores estables. Todo parece conjurarse para echar un manto de olvido sobre las tradiciones obreras y para bloquear un renacimiento combativo. En la izquierda ha habido larga discusión sobre la pérdida de la calidad de sujeto revolucionario por parte del proletariado, e incluso sobre si propiamente se puede hablar de una clase distinguible de otros sectores del pueblo. De la clarificación de estos dilemas depende mucho la visión que se tenga acerca de cómo serán los movimientos sociales de los próximos años.

En la sociedad emergente de la segunda mitad del siglo, se estableció la certeza de que la modernidad capitalista sería inviable sin un cambio en profundidad en las relaciones sociales en el campo. Más aún que en un escenario de politización de la población urbana, era altamente peligroso dejar a su suerte a millones de campesinos superempobrecidos. Los movimientos de tomas de tierra y las guerrillas de 1965 dieron el toque de alarma sobre lo que podía suceder. Por ello en el blanco principal de la "revolución militar" del 68, estaba la necesidad de producir una reforma agraria, que desactivase el fermento de la protesta campesina y la separase de las tentaciones insurreccionales de la época.

En el Perú, se asistía desde los últimos años de la década del 50 a una acelerada desintegración del régimen de la hacienda serrana; las sequías largas y la hambruna, se convirtieron en acicate para un violento cambio en las relaciones de propiedad agraria, cuando miles de hombres y mujeres procedieron a tomarse la tierra por ellos mismos y a castigar a los hacendados y gamonales, movidos por la desesperación. La opción de Velasco era evitarse un choque brutal como el que se hizo patente en otros países. El proyecto militar peruano apuntaba a forjar una alianza con los campesinos, plagada de partenalismo y autoritarismo. Pero que no hubiera sido nada sino se hubiese producido un cambio real en la estructura de propiedad y producción del agro.

Se sabe que, en el Perú, los militares fueron quienes dieron el puntillazo final al viejo latifundio y propiciaron una forma de reparto de tierras entre los campesinos, que si bien cambio la vida del campo, dejó una gran masa insatisfecha y postergada, que no tardaría mucho en entrar en acción, para hacer su propia reforma de la reforma. El velasquismo no consiguió cooptar a los campesinos, a la manera, por ejemplo, como ocurrió en México después de la revolución, o como se repitió en Bolivia, en 1952. A lo sumo, el campesinado quedó momentáneamente dividido entre beneficiarios y no beneficiarios, entre adherentes y adversarios del gobierno, entre CNA y CCP, pero esta separación empezó a perder sentido en tanto se hacían patentes los retrocesos de Morales Bermúdez y de Belaúnde. Los primeros intentos de contrarreforma hicieron, paradójicamente, más por la unidad de acción del campo, que la sonada reforma de las Fuerzas Armadas.

El movimiento campesino de los 80, fue bastante diferente al anterior de la reforma. El tema de la tierra cobraba otro sentido, ya que se trataba más bien de afirmar su propiedad, perfeccionarla y hacerla producir; se planteaban los problemas de los insumos, el crédito, la comercialización y el mercado. El localismo había sido sobrepasado por una visión nacional. Las proclamas de agrarismo que en su momento lanzara Alan García reflejaban este peso que la organización campesina tenía aún en los años del gobierno aprista. En 1988, las organizaciones agrarias todavía fueron capaces de protagonizar una ola de huelgas en todo el país para censurar prácticamente la frustrante política agraria del demagógico presidente de los Rimanacuy y el "crédito cero".

¿Qué pasó desde entonces; cómo se diluyó el movimiento hasta llegar a su virtual desaparición bajo Fujimori, que ha podido decretar el retroceso general del régimen de propiedad de la tierra sin hallar resistencias?. La única explicación posible a estos acuciantes puntos, es referirse a los efectos acumulados de los malos años agrarios, a los desastres naturales y de mercado, y a la cada vez más aguda descapitalización de los productores campesinos. Así se puede advertir que si la vieja hacienda resultó impotente para dirigir el desarrollo del campo, la pequeña propiedad sometida a las reglas del capitalismo no encontró las fuerzas en ella misma para salir adelante.

Las organizaciones campesinas se han ido debilitando con el giro de la situación, para el que no estaban preparados. Cuando los dirigentes formados en la lucha reinvindicativa y en el radicalismo ligado a los proyectos socializantes y obreristas, empezaron a hablar de producción y de mercado, que eran los temas que golpeaban las conciencias de la gente, se encontraron con que no tenían respuestas a estos problemas y que las bases no los veían como los que les darían las soluciones que estaban buscando. En verdad esas búsquedas llevaban mucho de quiméricas. Pero traducían un proceso de cambios en el que todo pasado es sometido a cuestionamiento implacable, sin que se sepa mucho de que presente y futuro deben ser construídos.

El ajustón de la economía, especialmente el de octubre del 90, terminó por asfixiar las débiles parcelas que no tenían reservas de capital, y, por si fuera poco, las privó además de los mecanismos de apoyo estatal que las habían venido sosteniendo: Banco Agrario, ENCI, ECASA, etc. El discurso neoliberal hacía ver que en el Perú los campesinos eran en realidad empresarios de la tierra. Como tal tenían que someterse a las viscisitudes de esa condición. En otras palabras invertir de dónde no tenían, o quebrar cediendo la propiedad a quienes pudieran sustituirlos. El movimiento campesino se ha estrangulado en la imposibilidad de pasar los límites impuestos por el régimen, o, lo que es lo mismo, en su incapacidad para hacer que sus problemas sean comprendidos por otros sectores y se recupere la unidad del movimiento popular.

Al comenzar los años 50 el Perú parecía entrampado en las garras de la dictadura odriísta. Sin embargo los cambios se sucedían velozmente. Más allá de las intenciones y los conceptos de gobernantes y opositores. La universidad, perseguida, golpeada, humillada, por

los cachacotes, estaba procesando la segunda reforma del siglo abriendo sus puertas a los hijos de los trabajadores, los campesinos, los probladores de los barrios marginales, que daban vida al Perú de ese momento. En el primer cuarto del presente siglo, la universidad nacional dejó de ser una exclusividad oligárquica y un espacio de reflexión especulativa apartado de la sociedad, y se convirtió en la meta de las clases medias ilustradas, el centro de la crítica a la conducción nacional, y el lugar de los aspirantes a ser gobierno. Esto volvería a cambiar treinta años después al aparecer una universidad nacional mucho más popular y provinciana, levantisca contra el sistema, y al mismo tiempo, atenta a la técnica moderna.

La universidad cambiaba con el país. Se hacía menos elitista, pero también más capitalista. Más democrática (tercio estudiantil, elección autoridades) e izquierdista, pero de igual modo más tecnocrática. Y esta universidad que se liberó de la hegemonía aprista sobre sus gremios y le pidió cuentas de sus traiciones al partido de Haya de la Torre, que es también la que rompió duramente con el reformismo inconsecuente de Belaúnde, se hizo izquierdista y radical, engendrando las corrientes procastristas y prochinas, concluyó chocando con el gobierno militar. Paradójicamente quienes pudieron ser progresistas respecto al control nacional de los recursos naturales y la reforma agraria, eran autoritarios y conservadores en relación a la juventud, de la que creían que sólo era rebelde por malcriada y por que le faltaba quién la pusiera en su sitio.

Con la llamada "ley gorila", los militares cortaron aguas con los estudiantes y se privaron de su energía y de su aporte crítico. Por ello fracasaron los intentos de movilizar alumnos identificándolos con los objetivos de la "revolución militar", tales como el Secigra (servicio de graduandos) o la alfabetización. Pero mayor fue el daño que se infirió a la universidad nacional. El conflicto largo caotizó el sistema; estableció autoridades efímeras que competían en obsecuencia al poder central, y en autoritarismo gratuito hacia lo interno; profesores que negociaban su permanencia en el puesto más allá de sus reales capacidades académicas; dirigencias gremiales que tenían más éxito cuando ensayaban las caracterizaciones más radicales y subjetivas sobre los acontecimientos. Tomas de locales, recesos y reanudaciones, hicieron que nunca se supiera cuánto tiempo debía tomarse para cumplir con cada carrera. El ultraizquierdismo impuso la intimidación, el oportunismo la corrupción.

Entretanto la universidad se separaba más y más de la sociedad circundante. Las peripecias de la clase obrera y el campesinado apenas si lograron eco en el claustro. Para ligarse al movimiento social, los jóvenes tenían literalmente que suspender o abandonar sus estudios, es decir zafarse de la organización universitaria.

Sendero Luminoso nació en la Universidad de Huamanga en el comienzo de los años 70 y de allí se expandió hacia San Marcos, la UNI y otras universidades del Estado. Una década después parecía haber desaparecido por efecto del retiro de cuadros y de la clandestinización. Pero a fines de los 80, la radicalización del sistema universitario multiplicó su influencia. El senderismo estudiantil aparecía, en esta etapa, como una eclosión de la crisis y falta de salidas en que se encontraba atrapada la educación superior del Estado.

Si los jóvenes no podían esperar profesores y contenidos de calidad, ni espacio para la investigación y el estudio, ni oportunidades de emplearse luego de obtenido el título; si encontraban hostilidad del lado del Estado, la empresa privada y la llamada opinión pública; si los policías, militares y jueces los consideraban sospechosos por edad, condición social, origen provinciano y pertenencia a la universidad; si los líderes de izquierda se mostraban derechizados y los ultras no querían mirar más allá de sus narices; era explicable que el Sendero aureolado de violencia y de negaciones totales, pareciese la opción más consecuente. El caos creciente de la universidad fue abonando el terreno de la intervención. Pero el fujimorismo, prefirió esperar que se manifestaran los primeros síntomas de derrota social y subversiva, para ocupar militarmente los claustros. Lo único que podía sorprender es que fuera un exrector, el encargado de ordenar que la tropa hiciera evidente la impotencia de las autoridades para establecer el orden. La campaña de los soldados pintores, midió las sensibilidades de la comunidad universitaria.

Cuando pasó, con aceptación de rectores, parte de los docentes y los estudiantes, ya estaba maduro el camino para reorganizarlas, colocando nuevas autoridades digitadas desde arriba. Ahogada la universidad estatal, se había cerrado el ciclo. La reelitización se concretaba por la vía de su reemplazo por las universidades particulares, elevadas a la condición de instituciones serias, versus el "caos", y de exclusivos proveedores de profesionales y técnicos calificados, para la reproducción del sistema.

Finalmente en lo que respecta al llamado movimiento de pobladores urbanos, se puede decir que habiendo nacido de la migración campo-ciudad, provincias-capital, se tradujo en fuerza de masas al confrontar con los límites del sistema para resolver la cuestión de la vivienda. Los años 50 y 60 fueron los de las invasiones de terrenos, y los 70 aquellos de la lucha por los servicios y la consolidación urbana. Bajo el gobierno militar cuando se vivía aún dentro de la ilusión del progreso continuo, el Sinamos y otras instancias públicas, alentaban a creer que con un poco de inversión y bastante de trabajo propio, se lograría pasar de la precariedad a viviendas dignas. Esto fue rubricado en la denominación de "pueblos jóvenes", para ya no hablar más de barriadas, ni recordar la miseria. Las formas de organización de los invasores se replantearon mediante comités y centrales, que tenían como objeto canalizar las relaciones con el Estado. Esto duró mientras había algo que ofrecer, es decir hasta que se abrió la crisis.

En julio de 1976, luego que se conociera el primer paquete de medidas económicas para "corregir los desequilibrios económicos", los barrios de Lima se desbordaron y marcharon sobre el centro de la ciudad, para ser a duras penas detenidos por la policía en los puentes de acceso. El viejo miedo de que algunas vez las barriadas se volcarían sobre la urbe burguesa cobró actualidad inusitada. El estado de emergencia fue decretado para evitar la reedición del desorden y duró por más de un año.

En julio de 1977, las movilizaciones de las federaciones departamentales y el paro nacional de la CGTP del día 19, encendieron los pueblos jóvenes y los convirtieron en trincheras de combate contra la dictadura. Lo mismo ocurrió en mayo de 1978 y en mayo del 87, para sólo mencionar los picos de la lucha sindical popular a nivel nacional. Fue usual decir que el éxito de los paros nacionales se medía en la participación de los conos barriales. Y fue también casi un lugar común afirmar que allí las votaciones eran regularmente favorables a la izquierda.

El decenio de los 80, siendo el de la miseria creciente y el desamparo social, tenía que ser también el de los cambios en el mundo barrial. En esa etapa nace la cultura de la sobrevivencia, de juntar a la gente para buscar formas inmediatas de reducir el impacto de la crisis y el ajuste. No puede obviarse que, en su aspecto positivo, la sobrevivencia ha servido para movilizar y organizar a las mujeres del pueblo,

sacudiendo muchos prejuicios machistas; ha ayudado a contar con estructuras organizativas activas por más elementales que ellas fuesen; ha logrado poner en marcha sistemas de solidaridad, en medio de una ofensiva ideológica que apuntala el individualismo.

Pero tampoco se debe idealizar una realidad marcada por la pérdida de expectativas en lograr cambios importantes en su calidad de vida; por la desreponsabilización del Estado frente a las necesidades de los sectores populares, lo que traslada el fardo de sobrevivir a los de abajo; por la desmoralización de los pobres que pasan a creer que es su suerte la que los ha hundido y no los deja salir. Por medio de los vasos de leche, las cocinas y comedores populares, los talleres productivos, las organizaciones de comerciantes ambulatorios y microempresarios, se ha ido haciendo frente al desafío de vivir. Pero, como es evidente, este mundo abigarrado de la pobreza, es mucho más difícil de centralizar y de darle un rumbo que todas las organizaciones anteriores.

La sobrevivencia es definitivamente una manifestación de elementalidad, que se ha ido encontrando cada día con la burocratización de las dirigencias vecinales, el fracaso de los sindicatos, el derrumbe político y moral de los partidos. No se puede culpar a la gente por haber resistido y salvado a sus familias, aún cuando el sistema se haya valido de su esfuerzo para ahorrarse buena parte del costo social del ajuste. Tampoco puede reprochárseles su creciente distanciamiento de la política de los partidos, si en ella no percibía salida a sus problemas y si, por el contrario, en su memoria estaba todavía el sinsabor de las manipulaciones y de las defecciones de muchos de sus dirigentes.

El movimiento popular, basado en la clase obrera, campesinado, juventud universitaria, población de los barrios, en maestros y trabajadores públicos, entra en su etapa madura en los últimos tramos del gobierno de Velasco Alvarado. No es exagerar decir que en la conspiración del golpe del 29 agosto de 1975, estaba, además de la borrachera de Morales Bérmudez, la inquietud del alto mando acerca de una situación que empezaba a escapar de las manos del enfermo y terco general. Para los militares de la primera y segunda fase, el peor de sus fracasos fue no llegar a hacer realidad una organización de masas que fuese su heredera de sus reformas, es decir no poder repetir aquí lo que hizo Perón en la Argentina, es decir darle continuidad

orgánica al nacionalismo de origen militar. A pesar de haber anunciado el fin de los partidos políticos, lo cierto es que ellos reaparecieron en la coyuntura de los 80.

Pero lo que más creció, a costa de lo que quiso ser el velasquismo, fue la izquierda. Los militares que se habían asignado la misión de despejar los riesgos de la radicalización de las masas en el país, debieron ver que sindicatos y comunidades laborales, organizaciones campesinas, gremios estudiantiles, dirigencias barriales, se convirtieron en base natural de partidos y líderes públicos que habían sido perseguidos y proscritos por ellos. La clave de este desenlace estuvo no en una extendida influencia, ni en un gran aparato, ni en promesas baratas, de los partidos de izquierda. Con esas pautas no se habría podido enfrentar a un régimen que se confundía con todo el sistema de poder. Fue el asiento que se tenía en los sectores organizados, lo que emergió como liderazgo nuevo en el auge social y, más tarde, se expresó electoralmente.

La herencia velasquista se convirtió en patrimonio de izquierda, al punto que algunos de los más notorios personajes de la "revolución militar", se convirtieron, más tarde, de civiles, en lúcidos y consecuentes portavoces de posiciones nacionalistas y socialistas al interior del espacio de las izquierdas. Más aún que se mantuvieran firmes en sus convicciones, cuando muchos de los líderes radicales de otrora habían tirado la toalla.

Después del régimen militar de los 12 años, el Perú lucía como depurado, con bloques políticos casi equivalentes de derecha, centro e izquierda, y lo que es más importante con referentes sociales precisos. Las clases acomodadas, la burguesía y la clase media de altos ingresos, daban vida al tercio derechista; el resto de la clase media y una fracción de los sectores populares con mayor consolidación económica, apoyaban al centro, que en lo específico lo conformaba el APRA; mientras que los sectores populares, los núcleos organizados y la masa no organizada, miraban mayoritariamente hacia la izquierda. La presencia del fujimorismo descompuso, de arranque, este cuadro aparentemente ordenado.

En el trance de la primera vuelta se volteó un grueso paquete de votos del tercio de izquierda y una menor porción del APRA, que se transfirió al candidato de Cambio 90, que en muy corto tiempo se convirtió en el impensado recurso de última hora para cerrarle el

paso al engreído de las derechas. Seguramente de no haberse dividido la IU y de haber podido captar la atención del electorado que rechazaba la amenaza de la reacción, no hubiera sido tan brusca la corrida hacia el "chinito" aventurero, cuya máxima audacia programática había sido ofrecer el "no shock", y cuya perspectiva como gobierno era un enigma cubierto de misterios.

Pero la izquierda llevaba también en contra el lastre de la conciliación de algunos de sus principales dirigentes con el APRA, con la que buscaron armar incluso un "acuerdo nacional", es decir alguna forma de cogobierno; cargaban un desgaste con sus bases más organizadas y politizadas, que se iban escindiendo frustradas por la sucesión de gestos pusilánimes disfrazados de " renovación", tenían, finalmente, el pasivo de una política asistencial que buscaba un encuentro con los pobres, pero que no les ofrecía una salida a su miseria, sino sólo hacerse cargo de ella. Fujimori se insertó, sin saberlo, en este nudo fatal de las izquierdas, mucho antes que los jefes de IU mandaran a votar por él en segunda vuelta. Cuando la directiva fue dada, los antiguos votos izquierdistas ya estaban en otro lado, y lo único que estaban haciendo las direcciones era sancionar su definitivo traspaso a las canteras cambistas.

Los pueblos jóvenes y los distritos rurales, antiguos bastiones de la izquierda, en los que nadie hubiera supuesto la posibilidad de una victoria de otras fuerzas, son hoy las plazas fuertes del "chinito" . No quedan prácticamente alcaldes de izquierda en los barrios populares de Lima, salvo aquellos que fueron IU y ahora visten los colores del gobierno. El discurso político a lo que la gente presta atención ya no es el que habla de la sobrevivencia de los pobres, sino el que les ofrece el ensueño de llegar a ser parte de una sociedad de empresarios modernos.

Se pueden dar explicaciones sociológicas, como la desproletarización y la desestructuración social derivadas de la crisis, al fenómeno de la adhesión popular a Fujimori, pero siempre y cuando no se nuble los desencadenantes políticos. Después de todo, se sabe que el actual presidente hizo profesión de no ajustarse a ningún programa y resolver cada problema por intuición o consejo de los brujos. Su capacidad de expresar a una parte del país, no viene de sus ofrecimientos, sino de la cercanía que sus seguidores encuentran hacia su persona.

Desde su lenguaje entrecortado y sin gramática, que lo ha convertido en ideal de un nuevo tipo de político que empieza sus discursos advirtiendo "que no sabe hablar". Desde su autoritarismo sin empacho que le conduce a hacer críticas frontales a dignatarios que parecían intocables: parlamentarios, ministros, jueces, diplomáticos, políticos, todo excepto jefes militares y policiales, lo que ha alimentado una cultura de bronca en el país, sacudiendo la modorra conciliadora. Desde su oportunismo electorero, que se celebra como el triunfo del "sapo", sobre la vieja sonsera achacada a los peruanos. Los sociólogos y economistas debieran prestar atención a esta dimensión sociocultural con efectos sobre la política concreta. Los pobres que ya no quieren ser tratados con lástima por su condición, han perdido contacto con la izquierda asistencialista y las ONG, con los parlamentarios y alcaldes con vocación de intermediarios políticos.

La ilusión que había detrás de la primera elección de Fujimori era la del ascenso de los desposeídos y postergados. Aquí muy pocos cayeron en la cuenta que "el chinito del tractor" no era "el peruano como tú" que ofrecía la propaganda; sino el bien acomodado ingeniero hijo de japoneses, dueño de fundos y terrenos urbanos. Finalmente se cumple el principio de que la masa empobrecida y desestructurada no puede llegar a gestar una representación propia y coherente, por lo que, en la medida en que no puede aliar su destino a las clases principales, termina siempre por ser usurpada por algún aventurero, encantador de serpientes. El espacio del pueblo-pueblo que pareció haberse abierto por arte del voto sorpresa, se reveló muy rápidamente como inexistente. No había un hombre de los sectores postergados y marginados, un informal o un empresario precario,al frente de la conducción del Estado, sino un personaje ambicioso y sin escrúpulos, experto en simulación, que se servía del engaño a los pobres para facilitar un nuevo trato con los ricos que les resarciera de su derrota, y que a cambio pedía seguir manejando el Estado tanto tiempo como fuese posible.

Pero este equívoco no hubiese pasado de un accidente, si es que en los años siguientes a su elección Fujimori no hubiese seguido alimentando una relación directa con aquella masa para decirles, día a día, que las obras, pequeñas pero reales, dependían de su voluntad benefactora. Nunca se podrá medir la importancia de la frase "es el primer presidente que llega hasta nosotros", pronunciada por

habitantes de pueblos jóvenes o por comuneros de distritos rurales, no importa si en verdad es el primero, sino la connotación esperanzada, la carga de ilusión que se encierra tras estas palabras.

No importa si llega para tener sus votos seguros para cuando hayan nuevas elecciones, el asunto es que llega todo el tiempo. Que dedica a ello la mayor parte de su ejercicio de gobierno. Que ha hecho además una ideología de las oportunidades de "modernidad" que representan construcciones de material noble, energía eléctrica, computadoras, más o menos como los colonizadores ofrecían espejos de la modernidad occidental a los antiguos habitantes de estas mismas tierras.

El presidente Fujimori ha abierto la oportunidad para el gran negocio de los ricos, nacionales y extranjeros. Pero ha calculado hacer sentir su autoridad en algunos casos puntuales para dar a entender que nadie es más que el presidente. La SUNAT; SUNAD e Indecopi, sirven para poner en su sitio a la empresa respondona, y para trasmitir a los pobres la noción de que su presidente también puede castigar a los poderosos. Si se indaga a fondo se verá que esto es fundamentalmente apariencia y que el fujimorismo jamás producirá algún golpe en serio sobre los bolsillos de la gran empresa. Pero aún el gesto y su "puesta en escena", cuentan mucho en una fase de recomposición de espacios políticos.

La caída perpendicular de las expectativas, ese sentimiento de que más vale lo inmediato, lo elemental realizable; que las cosas de más largo aliento, los proyectos más grandes, vistos como difícilmente accesibles; resulta un rasgo fundamental de la crisis en el Perú; y un factor que ha actuado tremendamente a favor de una experiencia del tipo de la de Fujimori. Al presidente de los 90 nadie le pedía la proeza de sacar al país del atraso, de la miseria, de la falta de empleo, de la inseguridad social. Las demandas se referían a asuntos más circunscritos y más urgentes: estabilizar los precios, frenar a Sendero. Era como si al Estado sólo le tocara atacar estos puntos para dejar luego a la sociedad que actúe por su cuenta. Pero no era verdad; la mayor parte de la historia reciente no hubo inflaciones significativas ni subversión armada, y esto no impidió la sucesión de crisis y la profunda frustración nacional.

La *popularidad* de Fujimori es hija de las bajas expectativas, del éxito para imponer la estabilización y pacificación, y de las pequeñas

obras para los pobres, que son vistas como el complemento generoso que su majestad presidencial brinda a los desposeídos. De paso la discusión sobre el "costo social" del ajuste y la contrainsurgencia, tan socorrida por los críticos de media lengua del régimen, perdió todo sentido cuando se hizo claro que justamente el haber acrecentado el sacrificio del pueblo y el recorte de sus derechos, aureolaba al gobierno con el mérito de haber podido alcanzar objetivos supuestamente muy difíciles. Se podría decir, incluso, que estaba en el interés de Fujimori agrandar el sentimiento de emergencia que se vivía en el país, para asegurarse justificativos para sus procedimientos golpistas y arrasadores.

No se puede medir al régimen fujimorista por el tamaño de sus obras físicas. Si fuera por ello las escuelas, postas, conexiones eléctricas, instalaciones de agua y desagüe, reparación de carreteras, se quedarían muy por detrás de lo hecho por los gobiernos constructores: Leguía Odría y Belaúnde, los más grandes sembradores de cemento. Pero la comparación es incorrecta. Porque lo que se juzga en otros presidentes es que realizaciones como los grandes colegios y universidades estatales, hospitales, irrigaciones, represas, hidroeléctricas, vías de comunicación, no crearon el país desarrollado que se había prometido, ni impidieron nuevas crisis.

En cambio a Fujimori se le aprecia, por desgracia, con la óptica afectada de la nación que se encontraba en bancarrota y a punto de ser vencida por la guerrilla maoísta, y que se ha dado el supuesto lujo de vencer estos problemas y hacer, además, obra concreta en zonas pobres y muy pobres. El descaro puede ser muy grande para convertir todo lo que se hace en obsequio personal del presidente, pero esto puede ser así porque no hay ningún movimiento de masas que reivindique las obras como una conquista de sus luchas y sus anhelos.

El método fujimorista no puede ser más crudo: se hace una encuesta de expectativas inmediatas en cada zona, se busca un padrino externo que brinde financiamiento, se hace la obra y la inaugura el propio presidente. Es el primer fondomentarista, a mucho orgullo, que muestra este sesgo hiperpopulista que le permite saber que tiene a las masas más atrasadas sobre control.

Las expectativas no son estáticas. Lo prueba el haber transcurrido desde etapas de altas exigencias populares, a la situación casi conformista de los últimos años. Hacia adelante no cabe duda que

las masas, aún las de menor visión política, buscarán y luego reclamarán que las mejoras de la situación lleguen a ellos. Ya se verificó en las municipales que buena parte de la población se está incomodando de los excesos gubernamentales y que en el camino se puede terminar en un verdadero divorcio. Algunas encuestas han puesto sobre el tapete que la gran mayoría de los que votaron por la reelección no creían haber vivido todavía un cambio que valga la pena, pero que habían dado su voto para que en este segundo período se vieran los beneficios de la política desarrollada. Era el último voto del cheque en blanco, de la confianza que no exige evidencias palmarias.

Ahora se entra a un período en el que la cantidad y la calidad de la exigencia irá en aumento. El relativo optimismo con el que se abre el último lustro del siglo, puede ser trocado en decepción y cambio en las actitudes. La contradicción está a la vista porque una política de concentración del ingreso y sobrepago de la deuda, no puede ser, a la vez, la que lleve adelante la prometida guerra contra la pobreza y logre resultados significativos.

Porque una reactivación sin redistribución del ingreso y aumento del empleo, delimitada por el F.M.I., no puede funcionar a largo plazo. Porque una "democracia directa" al estilo fujimorista, exige disgregación y atraso político, pero la experiencia va acumulando nociones cada vez más claras y reclamos de participación política, que no caben dentro del actual régimen. El giro de las expectativas puede ser la bomba de tiempo que al final haga estallar al inconmovible edificio del poder.

El movimiento popular debe basar el proceso de recuperación de sus organizaciones y conquistas, en un conocimiento al detalle de las condiciones reales, de la situación material y subjetiva de las masas, para poder actuar a partir de ello. La espontaneidad de las reivindicaciones puede servir de acicate para reconcentrar fuerzas y desgastar al adversario. Pero aquí se requiere mucho más que las voluntades de los sectores más combativos. La ilusión paralizante de la falsa representación que separa a los organizados de los no organizados, tiene un sustrato de experiencia que debe ser vivida y agotada, pero contiene también un elemento cultural y educativo que debe ser tomado en cuenta en la elaboración de respuestas y en la construcción de alternativas.

Capítulo VII
Habrá un final a todo esto

A manera de conclusión:
Algunas preguntas e
intuiciones sobre lo
que puede ser y lo que se debe
hacer
en el Perú de los próximos
años.

NO SE NECESITA SER DEMASIADO PERPICAZ PARA SABER QUE EN EL EJE de la vida política nacional de los próximos años estará presente la figura de Alberto Kenyo Fujimori Fujimori. Lo que él haga con el país, y lo que el país haga con él serán los factores determinantes del futuro inmediato. Mientras esté en sus manos, don Alberto volverá a hacer recordar a todos, cada cierto tiempo, su condición de elegido del pueblo. Y cada vez que ese mismo pueblo intente hacerle ver sus desagrados, lo que se desencadenará será procesos para desarticular a los protestantes y para volver a ganar a la masa mayoritaria al juego del chinito tramposo, pero encantador. Sin su "popularidad", Fujimori no es nada. No es nada para los militares, los empresarios y el imperialismo.

El esquema de poder vigente puede sufrir muchas variaciones moleculares, sean por desarreglos económicos y protestas burguesas en torno a los impuestos, pugnas castrenses por los ascensos, disputas con el F.M.I. sobre el gasto social y el dinero de las privatizaciones, problemas con los yanquis sobre política antidrogas y de derechos humanos. Pero subsistirá un equilibrio básico mientras se estime que la situación se mantiene bajo control. El punto clave es precisamente la cuestión del control. Quienes aspiren a terminar con el actual régimen deberán encontrar la forma, por así decirlo, de *descontrolarle* el cuadro político y empujar definiciones. La actual oposición va muerta porque ha identificado la estabilidad fujimorista, verdadera "pax romana", con un orden deseable, y al mismo tiempo pretende que esta no es una verdadera democracia como la que ellos harían.

Empezando el año 1996 los estrategas del gobierno parecen haber ya hecho una apreciación del teatro de operaciones y definido algunas pautas inmediatas. Vale aquí puntualizar algunas hipótesis tratando de encontrarle un sentido a lo que está ocurriendo:

(a) El cambio de la presidencia de la COPRI (Comisión para las Privatizaciones), del ministro de energía al premier Dante Córdova, puede entenderse como una decisión para acelerar y generalizar las ventas no sólo de empresas y activos productivos, sino de los servicios sociales. La tesis más razonable es la que indica que se necesita toda la autoridad política y la conversión del tema en prioridad nacional para llevar adelante la destrucción de Petroperú y los bienes nacionales que aún quedan en manos del Estado. ¿Por qué el apuro?. Todo indica que se piensa que si no es ahora no será nunca. Todo hace sospechar también que detrás de este aceleramiento hay un reparto pendiente de beneficios entre la cúpula del poder.

(b) La notable dureza con la que han empezado a ser tratados algunos grupos empresariales intermedios (industriales de la selva que han sufrido la brusca anulación de incentivos tributarios, importadores de vehículos usados víctimas de una prohibición abrupta), lo que ha llevado a algunos a preguntar si hay un alejamiento de la burguesía y de la ortodoxia liberal. La tesis en este caso apunta a señalar que el gobierno empieza a verse forzado a ajustar en algunos reglones para aumentar recaudación y ahorrarse dólares. En este objetivo poco cuentan los bandazos de ideología; igual se puede decir que todos deben pagar el mismo impuesto, aún los que se hallen en zonas alejadas y de frontera, sin tener cuidado con los compromisos de estabilidad tributaria firmados anticipadamente; o igual se puede argumentar que se proteje a los consumidores controlando lo que ingresa al país, aunque ello viole el dogma neoliberal. Los grupos afectados son, en todo caso, de los más débiles en la cadena económica.

(c) El reinicio de negociaciones con el F.M.I. para la firma de un nuevo acuerdo de mediano plazo en 1996, lo que significa que se ha entrado a evaluar toda la política económica. No extraña, por ello, que a este trance el gobierno busque llegar portando como ofrendas algunos de sus más notorios proyectos: privatización acelarada de grandes empresas y servicios, nuevos despidos en el sector público, mayores impuestos, recorte de importaciones etc. A su vez puede suponerse que Fujimori peleará para mantener un poder discresional sobre los recursos del ministerio de la presidencia, también conocido como el de la

permanente reelección. El gobierno sabe que el margen de presión con que cuentan en esta ocasión los funcionarios del Fondo, tomando en cuenta la inminencia de la reunión con el Club de París, es notablemente superior al que han tenido otras veces, que no era poco. La tesis es que esta vez habrá un compromiso trabajoso, que nadie podrá revestir con la idea de un equilibrio técnico en las cuentas.

(d) El retiro de las llamadas "Convenciones de Lima", que contenían los acuerdos preliminares de las conversaciones Perú-Chile, sobre la presencia peruana en el puerto de Arica, y que habían suscitado resistencias en la población tacneña; y el inicio, casi simúltaneo de una suerte de *diplomacia agresiva* hacia el Ecuador, dan una clara imagen de que el gobierno ha dejado a un lado la aspiración de entrar a la historia como aquel que zanjó las disputas territoriales con los vecinos del norte y sur, lo que parecía ser lo más a tono con la modernidad y el libre cambio, y ha cedido ostensiblemente a la presión de la opinión patriótica. Las actuales propuestas del ministro Tudela parecen hechas para que no haya acuerdo con los gobiernos vecinos y la discusión siga abierta en los años siguientes. Eso lo saben él y el presidente. ¿Por qué lo hacen?. La tesis es que han decidido no privarse del arma que significa poder recurrir cuando les sea necesario, cuando la coyuntura interna apriete, a un frente de unidad nacional bajo su conducción contra las *amenazas externas*. Desactivar el descontento respecto a las convenciones evita que futuras protestas puedan entremezclarse con denuncias al entreguismo territorial. ¿Y cuanto hay en todo esto de mar de fondo de los cuarteles?. No cabe duda que el retroceso oficial si tiene un destinatario evidente son los oficiales de mando medio, aquellos que fueron enviados al sacrificio en el Alto Cenepa.

(e) Los ascensos militares y las nuevas comandancias generales de las Fuerzas Armadas y la Policía, denotan que el gobierno ya no ha podido mantener el inmovilismo de años anteriores. Si bien Nicolás Hermoza Ríos sigue aferrado a su puesto, cual émulo criollo de Pinochet, los demás jefes principales han tenido que ceder en una compleja recomposición que hace subir otra vez a varios de los engreídos del régimen, pero que también permite llegar a algunos postergados, como es el caso de Ketín Vidal, comandante de la Policía Nacional. La tesis es que se está

produciendo una pugna por el control de la cabeza de estas instituciones y que el gobierno ha perdido un cierto margen de juego en los abatares internos. Puede suponerse que a Fujimori, Montesinos, Hermoza, no les causa gracia saberse disminuídos. Si es así no van a faltar zancadillas para hacer caer a los que no son de su pleno agrado, es decir que no son totalmente incondicionales. El general Vidal parece estar destinado a vivir un fracaso dictado desde Palacio y le va a ser bien díficil mantener su prestigio de jefe victorioso, desde el lugar que ocupa ahora.

(f) El inicio de la administración de Alberto Andrade, que ha servido para mostrar como la maquinaria fujimorista es capaz de revertir su derrota, arrinconar y destruir a sus adversarios. El recién inaugurado alcalde hace lo que puede para mantener su tono conciliatorio, lindante en la melosería, pero eso no le vale casi nada frente a la decisión gubernamental de sustituirlo con la presencia del ministerio Yoshiyama comandando las obras en los pueblos jóvenes; para robarle la mayoría en la asamblea de regidores, reclutando a los miembros más volubles de su lista; para boicotearlo en sus actividades, hacerle desplantes en sus actos públicos, negarle dinero que requiere a gritos, etc.. Entretanto se ha iniciado el juicio a Belmont, con toda la fanfarria que ya se usó para colgar a Alan García, lo que se convierte en los hechos en un aviso para el gordito sobre cuál podría ser su final destino. En medio del desconcierto, además, el congresista Joy Way hace declaraciones sobre una segunda reelección y un régimen de 30 años. La tesis es que aunque algunos imaginen que se trata tan sólo de una torpeza personal, lo que está comenzando es una ofensiva política para reconcentrar todo el proceso político en la figura de Fujimori y obligar al país a imaginar lo que podría pasar sin su presencia.

Los supuestos reseñados se proponen encontrar el sentido general de los acontecimientos. La idea es que no se está ante hechos puramente casuales. Pero, aparte del gobierno, ¿quién más está apreciando el curso político como una totalidad?. La ausencia de una oposición verdadera, a la que se pueda hacer caso, tiene que ver con esa impotencia para ubicarse en un terreno globalmente contrapuesto al que ocupa el gobierno de Fujimori. La incapacidad de desafiarlo en todos los frentes. Se puede convenir que bajo la apariencia de un

poder omnímodo, al que no le entran balas, ante el cual sucumben partidos y sindicatos, escritores de fama y embajadores de primera línea, izquierdistas y derechistas, Abimael Guzmán y Alfredo Zannatti, lo que hay es una descomposición lenta y muchas batallas subterráneas.

No se podría siquiera pretender tener algún papel en la edificación de una nueva oposición económica, política y social al fujimorismo, si no se tiene una comprensión adecuada de lo que pasa en el país. Este es el reto de impulsar la investigación y abrir el debate. Hay una fatiga de análisis que corroe los ánimos. Como si todo lo que tuviera que decirse de Fujimori ya estuviera dicho, aún cuando casi nada ha sido aclarado sobre el asunto. Peor aún, como si no hubiese que decir nada porque nada va a cambiar. Como si en los últimos años el Perú no hubiera estado sumido en un intenso cambio, muy lejos de la noción de una realidad pétrea e inconmovible que se hacen algunos para dejarse abrumar por ella. No faltan los que piensan que no importa lo que hubiera hecho la oposición, si se peleó o concilió con el gobierno, igual la situación sería la misma. No importa si la izquierda dejó de ser consecuente con sus principios, porque el curso político no hubiera sido diferente.

El fatalismo ha invadido las ciencias sociales y ha hecho renacer las más diversas variantes de empirismo. Los estudios que se publican brindan datos valiosos e interesantes sobre la empresa informal, los nuevos ricos y los siempre pobres; sobre las nuevas mentalidades y conductas de hombres, mujeres y jóvenes; sobre los efectos de las leyes neoliberales en las organizaciones de masas. Pero son muy pocos los que se aventuran a explicar al país que tienen ante sus ojos: ¿cómo llegó hasta donde está y qué le espera?. El gobierno se lanza sobre la universidad y la énorme mayoría de los maestros callan y consienten; los más dignos hacen sus maletas y se van a otra parte. El oscurantismo dictatorial se respira en todas partes, en la prensa complaciente, las revistas sin filo crítico, los medios que se clausuran, los columnistas que dejan de aparecer de la noche a la mañana, los libros que no se publican, los debates que no se producen. Un país asfixiado intelectualmente no tiene como recuperar su vitalidad más profunda. Eso lo sabe perfectamente el fujimorato y es lo que quisiera poder lograr doblegando a todos aquellos que expresan una resistencia argumentada a sus proyectos.

¿Tiene Fujimori realmente respaldo mayoritario para cada una de las decisiones que viene tomando que comprometen el destino de la nación?, ¿cuál es la posición de los peruanos ante el intento de venta y fraccionamiento de Petroleos del Perú?, ¿después de haber vivido la experiencia de lo que significan los teléfonos y la energía eléctrica en manos de empresas privadas extranjeras, el encarecimiento de los servicios, la deficiencia en la atención, el cambio en las prioridades, está la gente de acuerdo en colocar la extracción, refinamiento y venta de combustibles, en manos transnacionales?. Mucha gente, organizaciones y autoridades de las zonas petroleras, los sindicatos de la empresa, parlamentarios, alcaldes y exministros, investigadores económicos de prestigio han dado su palabra oponiéndose a la inaudita idea de arrasar con Petroperú. Hay fuerza para un movimiento nacional contra el gobierno. ¿Por qué no hacerlo?. ¿Por qué no exigir un referéndum nacional para decidir esta acuciante cuestión.

¿Estarían los peruanos de acuerdo, si pudieran manifestar libremente su opinión, en que se firme un nuevo compromiso con el F.M.I., teniendo en su mano informmación exacta sobre el porcentaje del presupuesto nacional que se destinará a pagar intereses de una deuda que no tiene manera de ser cancelada?, ¿habrá alguién dispuesto a informar y a llamar la atención sobre las conseciones de política económica que se están cocinando dentro de la Carta de Intención de 1996?, ¿cuántas personas saben, por ventura, que el crédito de balanza de pagos que ofrece el Fondo, no va a ser usado por el Perú por tener suficiente reservas, es decir que se somete a esta vergonzosa supervisión sin beneficio alguno, solamente para tener un certificado para otras negociaciones de las que tampoco vendrá ningún crédito?. Algunas denuncias de un periódico económico sobre la verdad del Plan Brady conmocionaron el ambiente a fines del 95. Lástima que ese sea uno más de los periódicos veletas, que se opone un día para pasar franela la mañana siguiente. Lo importante es, sin embargo, advertir que una campaña en este y otros puntos es posible.

Va a ser, sin duda, muy díficil hallar voluntades prácticas, personas concretas que estén dispuestas a entregar tiempo, energías, aportes económicos y materiales, para montar medios de prensa, crear centros de estudio y debate, convocar gente, preparar candidaturas, sin las cuales no habrá oposición alternativa. Seguramente lo que puede surgir, en primera instancia, es algo bastante distinto a un partido o

un frente político del viejo estilo. Ya sería un gran avance comenzar por una coordinadora de oposición. Lanzar un fórum nacional contra la desnacionalización, por la democracia y los derechos sociales. Es posible que sean muchos los que se sientan convocados ante una iniciativa de este tipo. Es razonable suponer que una vez abierta la dinámica, una vez demostrado prácticamente que el fujimorismo no está solo en el país, se abrirán muchísimas perspectivas que hoy no se aprecian a primera vista.

Actualmente hay, en medio de la dispersión, una cantidad de esfuerzos de personas que se reúnen para reflexionar, discutir y eventualmente hacer algo, porque se sienten enfrentados al régimen. Normalmente son núcleos pequeños y asociados a problemáticas particulares. Van desde grupos de dirigentes sindicales que buscan conservar una tradición clasista; comités de pobladores en pueblos jóvenes y en zonas rurales que propugnan el control democrático sobre los municipios; estudiantes agrupados contra al intervención y la degradación académica; mujeres que actúan con mayor conciencia de sus derechos; militares que expresan descontentos que trascienden; intelectuales que intercambian diagnósticos sin atreverse a formular salidas. Son, en general, manifestaciones pequeñas que no se sabe si fructificarán todas ellas o si, como sucede, habrán aquellas que no irán a ningún lugar. Pero en ese brullir de nuevas inquietudes están fermentando las energías que se requieren para el cambio de rumbo.

El arte de la política de hoy consiste en saber encontrar los procesos profundos que llevan a la crisis del fujimorismo, a pesar de la imagen de todopoderoso e invencible que lo acompaña, y que abren camino a la recomposición del movimiento popular, no obstante el sentimiento de derrota y postración que ha dominado a sus dirigencias en todos estos años. Los fenómenos de modernización autoritaria habidos hasta ahora, han sido, como se ha dicho, involuntarios desencadenadores de extraordinarios desarrollos organizativos ulteriores, surgidos en el momento de la crisis final de los dictadores. Así se dió vida al APRA de los 30 y la izquierda de final de los 70. Es probable que este sea finalmente el sino del mesianismo fujimorista. En todo caso, quienes seriamente se proponen refundar una izquierda socialista y revolucionaria, para el cambio de sociedad, deben tomar muy en cuenta que será en la pelea por decidir la suerte del régimen actual en que se templarán las corrientes políticas con futuro.

Ninguna de las tendencias de la situación nacional indica que se marche a una decantación por inercia propia. Nadie puede decir haber visto a Fujimori y su entorno haciendo un sólo gesto de estar dispuestos a abandonar la nave del poder por procedimientos regulares. Todo lo contrario. Lo que se constata es que cada día y cada hora son invertidos en generar condiciones que conduzcan a la perpetuación de los actuales gobernantes. Esto equivale a hacer todo lo posible por mantener fragmentados y a la defensiva a sus reales, potenciales e imaginarios adversarios, y por separarlos sistemáticamente de los sectores más empobrecidos. Y en blandir la amenaza de militarización de la sociedad como recurso final para su preservación política.

Cada fogonazo de protesta habido hasta la fecha ha podido ser aislado por estos mecanimos. La ausencia de una oposición decidida a pensar regulamente las formas de hacer frente al avance autoritario, hace que una marcha por aquí, un paro por allá, una huelga sectorial, un abucheo al presidente, queden como datos aislados de una realidad todavía controlada desde arriba. Y sin embargo si en algo hay que insistir aquí es que las tendencias centrales de la situación peruana indican que la propia política del gobierno se desajusta y empieza producir cambios. Entonces los movimientos que se aprecian aislados cobran un sentido indicando que no hay derrotas ni retrocesos a los que no se pueda dar la vuelta.

El lugar que este trabajo se asigna es el de animar a una gran discusión y encuentro de todos los que buscan despojar a Fujimori de su arrogante título de "elegido del pueblo". Alberto Fujimori en realidad es el más grande manipulador del pueblo, aquel que coacta y distorsiona, sin mayor reparo, la voluntad de millones para hacer prevalecer la suya propia. La cuestión es llegar a abrir muchísimos ojos para que la verdad quede a la vista. La historia jamás fue lineal como se cree; antes bien, está llena de equívocos. Lo fundamental es que ellos se despejan en el tiempo. Los líderes providenciales, los salvadores del pueblo, han existido siempre. E igual la gente ha sabido salir de ellos. La confianza que aquí dejamos sentada es que, cualquiera sean las variantes de lucha política de los años siguientes, el pueblo del Perú sabrá al final elegir, decidir, con autonomía y fé en si mismo, un destino que valga la pena ser vivido.

57348

INDICE

Capítulo I
Milagro Asiático. 9

Capítulo II
Negocios son negocios. 23

Capítulo III
La dictadura no visible. 31

Capítulo IV
La oposición está desnuda. 41

Capítulo V
Sendero vergonzoso. 61

Capítulo VI
Representación falseada. 69

Capítulo VII
Habrá un final a todo esto. 85

Mención

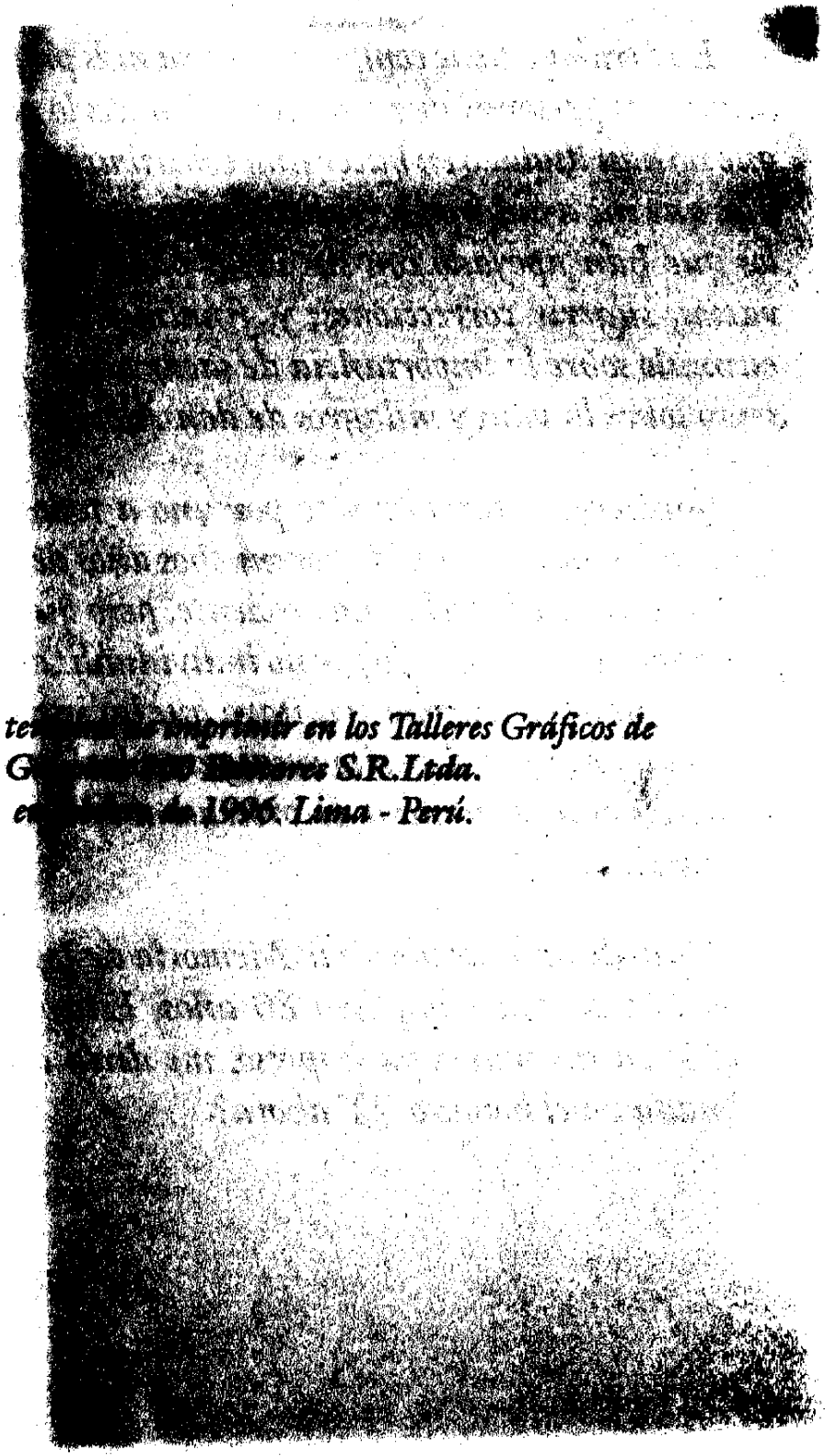
Este trabajo tiene comprometido su más profundo agradecimiento a muchas personas que ayudaron a hacerlo posible. Desde aquellos que no han dudado en hacer una contribución para costear la edición y los que me ayudaron a realizar gestiones para el financiamiento; a los que han apoyado con sus ideas para mejorar el texto, advertir vacíos, sugerir correcciones; y, finalmente, a tantas muestras de estímulo sobre la importancia de sacar a luz, justamente ahora, un texto sobre la vida y milagros de don Alberto Fujimori.

Quisiera mencionar uno por uno a todos estos buenos amigos, tanto a los que estoy unido por muchos años de mutua estima como a los que conozco de fecha más reciente, pero que han sido igualmente generosos. Pero he optado por no individualizar este agradecimiento. Pienso que de esta forma se evitará que las iras que puedan desatarse por lo que aquí está escrito recaigan sobre otro que no sea el autor. También es una manera de proteger a los inocentes de mis propias limitaciones.

He dedicado este libro a la Memoria de José Carlos Wiener Vega, en el año en que cumpliría 80 años. Estoy seguro que si pudiera tenerlo en sus manos ya impreso, me diría con una sonrisa y una palmada en el hombro: ¿Y ahora?.

Raúl A. Wiener F.

16.50



Esta obra se te[illegible] imprimir en los Talleres Gráficos de
G[illegible] Talleres S.R.Ltda.
en [illegible] de 1986. Lima - Perú.

UNIVERSIDAD
N° INGRESO: 57348
E EDUCACIÓN
lle
OCUMENTACIÓN
ASIFICACIÓN :
XV
320.985
W55
1996
O DEL USUARIO

57348

PERÚ 1996: Como los avaros, el Presidente Fujimori cuenta cada noche las ganancias y pérdidas de popularidad ocurridas durante el día. Y a partir de ello, define lo que será la mañana siguiente: las leyes, los viajes, los discursos y los disfraces con los que llegará a la gente. Sabe muy bien que de la mantención de los más altos índices de adhesión depende la solidez de su alianza con la cúpula militar, el apoyo de los capitales nacionales y extranjeros, así como el aval del FMI. Este libro está dedicado a develar el aparente misterio de la persistente popularidad fujimorista. El autor indaga en los procesos previos a 1990, avanza a interpretar los años vividos bajo el imperio de los Fujimori y concluye formulándose algunas de las preguntas claves sobre las posibles alternativas para superar la actual situación.

Raúl A. Wiener F. es periodista y analista político, fue sub director del Diario El Observador a inicios de la década del '80 y Director del Semanario Amauta entre 1988 y 1992.

Biblioteca UNE
01JVLB00057348

UNIVER
"Er
COLECCI

01JVLB00057348

Fotografía de portada: Ernesto Jiménez